

Parte III
Resoluciones aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes

Resolución ICC-ASP/5 Res.1

Aprobada por consenso en la séptima sesión plenaria el 1º de diciembre de 2006

ICC-ASP/5 Res.1 Locales permanentes

La Asamblea de los Estados Partes,

Recordando su resolución ICC-ASP/4/Res.2, en la que se hacía hincapié en que “la Corte es una institución judicial permanente que, como tal, requiere locales permanentemente funcionales que le permitan desempeñar su cometido eficazmente y que reflejen su importancia para luchar contra la impunidad”, y se recomendaba, “teniendo en cuenta la recomendación del Comité contenida en el párrafo 86 de su informe sobre los trabajos de su quinto período de sesiones (ICC-ASP/4/27), que la Mesa de la Asamblea y el Comité se sigan ocupando de la cuestión de los locales permanentes de la Corte” e informen al quinto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Parte sobre la cuestión de los locales permanentes¹,

Recordando que se han estado examinando las tres opciones siguientes para el alojamiento permanente de la Corte: 1) permanecer en los actuales locales (edificio Arc); 2) trasladarse al edificio del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; y 3) construir expresamente nuevos locales en los terrenos de Alexanderkazerne,

Recordando asimismo la oferta inicial del Estado anfitrión que proporcionaba gratuitamente locales hasta 2012, y la nueva oferta del Estado anfitrión que figura en la carta de fecha 25 de enero de 2006 dirigida al Presidente de la Asamblea de los Estados Partes por el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado anfitrión²,

Tomando nota del informe de la Mesa sobre la cuestión de los locales permanentes de la Corte Penal Internacional³, que se refiere al informe provisional oficioso sobre los locales permanentes, y tiende a concluir que probablemente la tercera opción ofrecería la mayor flexibilidad en cuanto a planificación y costos,

Poniendo de relieve que los locales de la Corte tienen que responder a las necesidades de los diferentes interesados en lo que respecta a funcionalidad, flexibilidad (tanto en los plazos de construcción como en la petición de gastos), posibilidades de expansión, seguridad, carácter e identidad, y que el diseño debería reflejar esos requisitos,

Teniendo presente los informes del Comité de Presupuesto y Finanzas sobre los trabajos de su sexto⁴ y séptimo⁵ períodos de sesiones,

1. *Pide* que, sin perjuicio de la prerrogativa de la Asamblea de adoptar una decisión final sobre dónde albergar permanentemente la Corte, la Corte Penal Internacional se centre únicamente en la opción 3, la construcción de locales especialmente para ella en los terrenos de Alexanderkazerne,

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuarto período de sesiones, La Haya, 28 de noviembre a 3 de diciembre de 2005* (publicación de la Corte Penal Internacional, ICC-ASP/4/32), parte III.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, continuación del cuarto período de sesiones, Nueva York, 26 y 27 de enero de 2006* (publicación de la Corte Penal Internacional, ICC-ASP/4/37), anexo IV.

³ ICC-ASP/5/29

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, quinto período de sesiones, La Haya, 23 de noviembre a 1º de diciembre de 2006* (publicación de la Corte Penal Internacional, ICC-ASP/5/32), parte II, D.6 a).

⁵ *Ibíd.*, parte II.D.6 b).

con el fin de que la Asamblea pueda adoptar una decisión con conocimiento de causa en su próximo período de sesiones;

2. *Pide* a la Corte que, con el fin de que el Comité de Presupuesto y Finanzas pueda realizar un examen en su octavo período de sesiones, en 2007:

- a) ultime la preparación, en el plazo más breve posible, de una información funcional pormenorizada que incluya sus requisitos de uso y seguridad teniendo en cuenta las posibilidades de expansión en lo que se refiere a los niveles de personal;
- b) prepare, en consulta con el Estado anfitrión, estimaciones del costo del proyecto; y
- c) prepare, en consulta con el Estado anfitrión, un calendario provisional con puntos fundamentales de decisión, un resumen de la planificación y las cuestiones de permisos y una estrategia de planificación de los terrenos que muestre los enfoques modulares factibles de las posibilidades de expansión;

3. *Pide* al Estado anfitrión que, para que el Comité de Presupuesto y Finanzas pueda efectuar un examen en su octavo período de sesiones, en 2007, proporcione más información sobre las ofertas financieras y de terrenos contenidas en la nueva oferta del Estado anfitrión, con inclusión de las posibles opciones y métodos para gestionar el crédito propuesto, las cuestiones jurídicas relativas a la separación de la propiedad del terreno y de los edificios propuestos, y otras cuestiones que serían objeto de un contrato entre el Estado anfitrión y la Corte;

4. *Pide* a la Mesa que examine la información solicitada en los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva y que determine las lagunas existentes u otros motivos de preocupación para la Corte y el Estado anfitrión, de manera que la información se complete al nivel necesario;

5. *Pide* al Estado anfitrión que, en consulta con la Mesa y la Corte, proponga el marco, los criterios, los parámetros jurídicos y las modalidades de un concurso internacional de diseño de conceptos arquitectónicos, incluidos los criterios y procesos previos a la selección;

6. *Encarga* a la Mesa que, si le satisface la información proporcionada en los párrafos 2, 3 y 5 de la parte dispositiva *supra*, invite al Estado anfitrión a empezar provisionalmente un proceso internacional de selección previa de los arquitectos, de conformidad con la oferta del Estado anfitrión de organizar y financiar un proceso de esta índole, sin perjuicio de la prerrogativa de la Asamblea de los Estados Partes de responder a los restantes elementos de la nueva oferta del Estado anfitrión, de 25 de enero de 2006;

7. *Pide* a la Mesa que, en consulta con la Corte y el Estado anfitrión, prepare opciones para una estructura de buena gestión del proyecto que especifique las funciones y responsabilidades respectivas de la Asamblea, la Corte y el Estado anfitrión;

8. *Pide* a la Mesa que prepare las opciones para la participación efectiva de la Asamblea de los Estados Partes en la buena gestión del proyecto y la supervisión de las estructuras;

9. *Pide* a la Corte que establezca una estructura de gestión de proyectos dentro de su programa 5200 del proyecto de presupuesto por programas para 2007 y la dote del personal correspondiente⁶,

10. *Alienta* a la Mesa a que recurra a expertos de los Estados Partes para cumplir el mandato que le encomienda la presente resolución.

⁶ *Ibíd.*, parte II.D.5.

Resolución ICC-ASP/5 Res.2

Aprobada por consenso en la séptima sesión plenaria el 1º de diciembre de 2006

ICC-ASP/5 Res.2

Proceso de planificación estratégica de la Corte

La Asamblea de los Estados Partes,

Recordando el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución ICC-ASP/4/Res.4 en el que la Asamblea de los Estados Partes acogía con satisfacción la iniciación del proceso de planificación estratégica de la Corte e invitaba a la Corte a que cooperase con la Mesa en este proceso,

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico preparado por la Corte¹,

Teniendo en cuenta también el Plan Estratégico de Proyección Exterior² y la estrategia en materia de tecnologías de la información y la comunicación³ preparados por la Corte, así como la estrategia en materia de enjuiciamiento presentada por el Fiscal en dos audiencias públicas,

Teniendo en cuenta el informe de la Mesa relativo al diálogo iniciado con la Corte sobre el Plan Estratégico,

Consciente de que sigue su curso el proceso interactivo de elaboración de ese Plan,

1. *Toma nota con agradecimiento* de los esfuerzos realizados hasta la fecha por la Corte por establecer un plan estratégico, un plan estratégico de proyección exterior y una estrategia en materia de tecnologías de la información y la comunicación, así como de los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Fiscal para establecer una estrategia en materia de enjuiciamiento;
2. *Invita* a la Corte a que prosiga el diálogo iniciado con la Mesa acerca del Plan Estratégico;
3. *Recomienda* que ese diálogo se centre en la aplicación concreta del Plan Estratégico e incluya, sin que la enumeración sea exhaustiva, cuestiones transversales tales como la localización de las actividades de la Corte, la situación de las víctimas, las actividades de comunicación y proyección exterior de la Corte y la relación entre el Plan Estratégico y el presupuesto;
4. *Decide* invitar a la Corte a que presente al próximo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes una actualización del Plan Estratégico a la luz del diálogo mantenido con la Mesa.

¹ ICC-ASP/5/6.

² ICC-ASP/5/12.

³ ICC-ASP/5/7.

Resolución ICC-ASP/5 Res.3

Aprobada por consenso en la séptima sesión plenaria el 1º de diciembre de 2006

ICC-ASP/5 Res.3

Fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y de la Asamblea de los Estados Partes

La Asamblea de los Estados Partes,

Teniendo presente que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos contra el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que la conciencia de la humanidad sigue profundamente conmovida por las atrocidades inimaginables que se cometen en distintas partes del mundo y que ahora se reconoce ampliamente la necesidad de prevenir los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional y de poner fin a la impunidad de sus autores,

Convencida de que la Corte Penal Internacional es un medio esencial de promover el respeto del derecho humanitario internacional y los derechos humanos, contribuyendo de esta manera a la libertad, la seguridad, la justicia y el imperio de la ley así como a la prevención de los conflictos armados, la preservación de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional y el impulso de la reconciliación y la consolidación de la paz después de los conflictos con miras a conseguir una paz sostenible de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Convencida también de que no puede haber paz duradera sin justicia y de que la paz y la justicia son por consiguiente requisitos complementarios,

Convencida asimismo de que la justicia y la lucha contra la impunidad son y deben seguir siendo indivisibles y de que, a este respecto, es esencial la adhesión universal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

Acogiendo con satisfacción el papel central de la Corte como la única corte permanente de justicia penal en el seno de un sistema de justicia penal internacional en evolución,

Consciente de la necesidad de estimular la plena participación de los Estados Partes, los observadores y los Estados que no tienen la condición de observador en los períodos de sesiones de la Asamblea y de asegurar la máxima visibilidad de la Corte y de la Asamblea,

Consciente de los riesgos con que se enfrenta el personal de la Corte sobre el terreno,

Deseosa de prestar asistencia a la Corte y sus órganos en el cumplimiento de las tareas que se le han encomendado, en particular mediante la supervisión de la gestión y otras medidas adecuadas,

A. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros acuerdos

1. *Da la bienvenida* a los Estados que han pasado a ser Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el cuarto período de sesiones ordinario de la Asamblea e *invita* a los Estados que aún no son partes en el Estatuto de Roma a que pasen a serlo lo antes posible;

2. *Decide* mantener en examen la situación de las ratificaciones y seguir las novedades que se produzcan en el ámbito de las leyes de aplicación con el fin, entre otras cosas, de facilitar la

prestación de la asistencia técnica que los Estados Partes en el Estatuto de Roma o los Estados que deseen convertirse en Partes en el mismo puedan pedir a otros Estados Partes o instituciones en las esferas pertinentes y, a tal efecto, *decide* adoptar y aplicar el proyecto de plan de acción para conseguir la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma anexo a la presente resolución¹ y *pide* a la Mesa que examine la aplicación del plan de acción y los progresos logrados en la consecución de sus objetivos y que informe al respecto a la Asamblea antes de su sexto período de sesiones;

3. *Destaca* que se debe preservar la integridad del Estatuto de Roma y se deben respetar las obligaciones convencionales derivadas del mismo y *alienta* a los Estados Partes en el Estatuto de Roma a que intercambien información y se presten apoyo y asistencia mutuos con ese fin, en particular en situaciones en que se cuestione la integridad de dicho Estatuto, y *recuerda* a los Estados la necesidad de promover el espíritu del Estatuto y su obligación de cooperar con la Corte en el cumplimiento de su mandato;

4. *Exhorta* a los Estados que aún no lo hayan hecho a que, como cuestión de prioridad, pasen a ser partes en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y lo incluyan en su legislación interna según proceda;

5. *Recuerda* que el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y la práctica internacional eximen de los impuestos nacionales a los sueldos, emolumentos y subsidios pagados por la Corte a sus funcionarios y a su personal y *pide* a los Estados que no sean todavía partes en ese Acuerdo que tomen las medidas legislativas o de otra índole necesarias, en espera de su ratificación o adhesión, para eximir a sus nacionales empleados por la Corte de los impuestos nacionales sobre los ingresos aplicados a los sueldos, emolumentos y subsidios pagados por la Corte o que concedan una desgravación fiscal de cualquier otro tipo a sus nacionales en relación con esos pagos;

6. *Acoge con satisfacción* la conclusión de las negociaciones entre la Corte y el Estado anfitrión sobre el proyecto de acuerdo relativo a la Sede entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión², *aprueba* el proyecto de acuerdo, cuyo texto se recoge en el anexo³, y *exhorta* al Presidente de la Corte a que concluya el acuerdo en nombre de la Corte lo antes posible.

B. Creación de instituciones

7. *Toma nota* del último informe sobre las actividades de la Corte presentado a la Asamblea de los Estados Partes⁴;

8. *Toma nota* de las declaraciones hechas ante a la Asamblea de los Estados Partes por los altos representantes de la Corte, incluidos el Presidente, el Fiscal y el Secretario, así como por el Presidente del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y el representante del Comité de Presupuesto y Finanzas;

9. *Toma nota con satisfacción* del hecho de que debido, en buena medida, a la dedicación de su personal la Corte está en pleno funcionamiento y *toma nota* de los considerables progresos de sus análisis, investigaciones y actuaciones judiciales en las diversas situaciones que le fueron transmitidas por los Estados Partes y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas⁵;

10. *Toma asimismo nota* de que prosigue y se intensifica la presencia de la Corte sobre el terreno;

¹ Anexo I.

² ICC-ASP/5/25.

³ Anexo II.

⁴ ICC-ASP/5/15.

⁵ Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

11. *Toma nota* de la lista de abogados establecida en respuesta a la regla 21.2) de las Reglas de Procedimiento y Prueba y *alienta* a que se formulen nuevas peticiones de inscripción en dicha lista con el objeto concreto de asegurar una representación geográfica equitativa y un equilibrio de sexos;
12. *Acoge con satisfacción* la conclusión del Acuerdo de cooperación entre la Corte y la Unión Europea así como otros acuerdos de la Corte o de la Fiscalía y *espera* una pronta conclusión del acuerdo de cooperación con la Unión Africana e *invita* a otras organizaciones regionales pertinentes a que consideren la posibilidad de concluir acuerdos de esa índole con la Corte;
13. *Exhorta* a la Corte a que promueva la plena aplicación del Acuerdo de relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas;
14. *Reconoce con apreciación* la creciente cooperación entre la Corte y el sistema de las Naciones Unidas, puesta de relieve por la celebración de un juicio por el Tribunal Especial para Sierra Leona, por la excedencia final concedida al Fiscal Adjunto de Investigaciones para prestar servicio en la Comisión internacional independiente de investigación⁶ y por varios arreglos suplementarios establecidos en el marco creado por el Acuerdo de relación entre la Corte y las Naciones Unidas;
15. *Acoge con satisfacción* el establecimiento de la Oficina de enlace de la Corte en Nueva York;
16. *Acoge asimismo con satisfacción* la presentación del segundo informe del Presidente de la Corte a la Asamblea General de las Naciones Unidas⁷;
17. *Expresa* su agradecimiento al Secretario General y a la Secretaría de las Naciones Unidas por el apoyo prestado a la continuación del quinto período de sesiones de la Asamblea en la sede de las Naciones Unidas y *espera* que continúe esa cooperación en relación con futuros períodos de sesiones de la Asamblea,
18. *Reconoce* la importante labor realizada por la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes, *reitera* que las relaciones entre la Secretaría y otras secciones de la Corte deben regirse por los principios de cooperación, intercambio y centralización de recursos y servicios, como se estipula en el anexo a la resolución ICC-ASP/2/Res.3 y *subraya* la importancia de invitar al Director de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes a las reuniones del Consejo de Coordinación cuando se examinen cuestiones de interés mutuo;
19. *Acoge con satisfacción* las medidas tomadas por la Corte para aplicar el principio de “Corte única”, incluida la coordinación de las actividades de la Corte entre sus órganos en todos los niveles, respetando su necesaria independencia en el marco del Estatuto;
20. *Reconoce* la importancia de que en las situaciones sometidas a investigación la Corte haga participar a las comunidades en un proceso de interacción constructiva con la Corte, destinado a promover la comprensión y el apoyo de su mandato, gestionar las expectativas y permitir a esas comunidades el seguimiento y la comprensión del proceso internacional de justicia penal y, a tal efecto, *alienta* a la Corte a que intensifique esas actividades de proyección exterior, en particular a través de la aplicación de su plan estratégico de proyección exterior;
21. *Recuerda* a la Corte que al proceder a la contratación del personal el Estatuto le impone la obligación de tratar de obtener una representación geográfica equitativa, un equilibrio entre los sexos y las normas más elevadas de eficiencia, competencia e integridad, así como de tratar de

⁶ Resolución 1595 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁷ Documento de las Naciones Unidas A/61/217.

obtener los servicios de especialistas en cuestiones específicas, entre ellas la violencia contra las mujeres y los niños;

22. *Acoge con satisfacción* a este respecto el diálogo iniciado entre la Corte y la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes con miras a asegurar una representación geográfica equitativa y un equilibrio entre los sexos en la contratación de los miembros del personal y *pide* a la Mesa que prosiga su labor y presente un informe detallado al respecto al sexto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes con la inclusión de las propuestas que sean necesarias para seguir mejorando la distribución geográfica equitativa y el equilibrio entre los sexos en el proceso de contratación;

23. *Toma nota* del informe provisional de la Corte e *invita* a la Corte a que, en consulta con la Mesa, presente propuestas sobre el establecimiento de un mecanismo de supervisión independiente al próximo período de sesiones ordinario de la Asamblea de los Estados Partes;

24. *Exhorta* a los Estados a que adopten las medidas necesarias para la protección del nombre, siglas y emblemas de la Corte de conformidad con su legislación nacional y *recomienda* que se adopten medidas similares en relación con todo emblema, logotipo, sello, bandera o insignia que adopten la Asamblea o la Corte;

25. *Toma nota* de la importante labor realizada por el Comité de Presupuesto y Finanzas y *reafirma* la independencia de los miembros del Comité;

26. *Recuerda* que, según su Reglamento⁸ el Comité de Presupuesto y Finanzas será responsable del examen técnico de todo documento presentado a la Asamblea que contenga consecuencias financieras o presupuestarias y *pide* a la Secretaría que adopte las disposiciones necesarias para que el Comité de Presupuesto y Finanzas esté representado en todas las fases de las deliberaciones de la Asamblea de los Estados Partes en las que se examinan tales documentos;

27. *Decide* que se enmiende de inmediato el Reglamento del plan de pensiones de los magistrados de la Corte Penal Internacional a fin de evitar la posibilidad de que haya personas que reciban una pensión de la Corte al mismo tiempo que prestan servicio como magistrados en otro tribunal internacional, según se indica en el documento ICC-ASP/5/19;

28. *Pide* a la Corte que invite a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que considere la posibilidad de enmendar el Reglamento del plan de pensiones de los magistrados de la Corte Penal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda a fin de que ningún ex magistrado de cualquiera de esos tribunales reciba una pensión al mismo tiempo que presta servicio como magistrado de la Corte Penal Internacional.

29. *Decide* que las condiciones de servicio y remuneración del Fiscal y los Fiscales Adjuntos sean las mismas que las del Secretario General Adjunto y el Subsecretario General del régimen común de las Naciones Unidas, respectivamente, de conformidad con el carácter contributivo de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y *decide además*, sin perjuicio de lo que antecede:

- a) invitar al actual Fiscal y a los Fiscales Adjuntos actuales a que consideren la posibilidad de afiliarse a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas;

⁸ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, segundo período de sesiones, Nueva York, 8 a 12 de septiembre de 2003* (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.03.V.13, ICC-ASP/2/10), anexo III.

- b) pedir a la Corte que solicite al Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas su acuerdo sobre la participación retroactiva del actual Fiscal y los Fiscales Adjuntos actuales en la Caja; y
- c) dedicar, en su caso, el dinero no gastado del presupuesto de 2006 hasta un total de aproximadamente 404.520 euros, más los cálculos actuariales aplicables, como se detalla en el informe de la Corte contenido en el documento ICC-ASP/5/21, a sufragar la totalidad de los costos de su participación retroactiva desde la fecha de su entrada en servicio hasta el 31 de diciembre de 2006.

C. Cooperación y aplicación

30. *Acoge con satisfacción* la labor realizada por la Corte para fomentar la cooperación internacional con los Estados, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil y *destaca* que una cooperación eficaz continúa siendo esencial para que la Corte desempeñe sus actividades;

31. *Hace un llamamiento* a todos los Estados en los que se ha desplegado personal de la Corte y a todos los demás Estados de los que pueda depender ese personal para que garanticen la seguridad del personal de la Corte y eviten los ataques contra el mismo, y para que proporcionen cooperación y asistencia judicial para facilitar el desempeño y el cumplimiento de su mandato;

32. *Recuerda* que la ratificación del Estatuto de Roma debe ir acompañada del cumplimiento en el plano nacional de las obligaciones dimanantes de ese instrumento, en especial mediante leyes de aplicación, en particular en las esferas del derecho penal y la cooperación judicial con la Corte y, a ese respecto, *alienta* a los Estados Partes en el Estatuto de Roma que todavía no lo hayan hecho a que promulguen con carácter prioritario dichas leyes de aplicación;

33. *Insta* a los Estados a que, en especial teniendo en cuenta el principio fundamental de la complementariedad, tipifiquen en su legislación nacional como delitos punibles los crímenes enumerados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma y aseguren el cumplimiento efectivo de esa legislación;

34. *Insta* a los Estados a que cumplan sus obligaciones de cooperar con la Corte en las esferas de la conservación y el suministro de pruebas, la distribución de información, la consecución de la detención y la entrega a la Corte de personas contra las que se haya dictado una orden de arresto y la protección de las víctimas y testigos, y *alienta* a los Estados, a las organizaciones internacionales y regionales y a la sociedad civil a que intensifiquen su apoyo a la Corte en los esfuerzos que realice a tal fin;

35. *Exhorta* a los Estados a que establezcan acuerdos con la Corte con respecto, entre otras cosas, a la reinstalación de los testigos y a la ejecución de las penas;

36. *Pide* a la Mesa que aborde el tema de la cooperación e informe a la Asamblea de los Estados Partes en su próximo período de sesiones ordinario;

D. Asamblea de los Estados Partes

37. *Toma nota* del informe del Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión, *expresa su agradecimiento* al Instituto Liechtenstein de Investigaciones sobre la Libre Determinación de la Universidad de Princeton por acoger una reunión oficiosa entre períodos de sesiones del Grupo de

Trabajo Especial⁹, *reconoce* que el Grupo de Trabajo Especial necesita concluir su labor al menos 12 meses antes de la Conferencia de Revisión que se celebre de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 123 del Estatuto de Roma, a fin de estar en condiciones de presentar a la Asamblea, para su consideración en la Conferencia de Revisión, propuestas relativas a una disposición sobre la agresión, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto y con la resolución ICC-ASP/1/Res.1;

38. *Recuerda su decisión* de que en los años 2006 a 2008 se asignen al Grupo de Trabajo Especial al menos 10 días exclusivos de reuniones en Nueva York durante la continuación de los períodos de sesiones de la Asamblea y que el Grupo celebre las reuniones entre períodos de sesiones que considere apropiadas, y en consecuencia *decide* celebrar la continuación del período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial durante cuatro días en el primer semestre de 2008, en Nueva York, y *pide* a la Mesa que fije las fechas concretas;

39. *Pide* al Secretario de la Corte que revise el mandato del Fondo Fiduciario establecido en el párrafo 1 de la resolución ICC-ASP/2/Res.6 a fin de permitir a otros Estados en desarrollo recurrir al Fondo para aumentar la posibilidad de que esos Estados participen en las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, *pide asimismo* a la Secretaría que garantice que la información relativa a la disponibilidad de asistencia del Fondo Fiduciario se difunde ampliamente entre los Estados en desarrollo con suficiente antelación al período de sesiones anual de la Asamblea de los Estados Partes, así como que los Estados Partes en el Estatuto de Roma, en especial los que son países menos adelantados, obtengan un acceso prioritario al Fondo, *reitera* su llamamiento a los Estados, las organizaciones internacionales, los particulares, las corporaciones y otras entidades a que contribuyan al Fondo, y *expresa su agradecimiento* a los que ya lo hayan hecho;

40. *Subraya* la importancia de dotar a la Corte de los recursos financieros necesarios, e *insta* a todos los Estados Partes en el Estatuto de Roma a que transfieran íntegramente sus cuotas antes de que finalice el plazo del pago de contribuciones o, en el caso de que existan atrasos anteriores, de forma inmediata, de conformidad con el artículo 115 del Estatuto, la regla 105.1 del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada, y otras decisiones pertinentes adoptadas por la Asamblea de los Estados Partes y las normas y otras decisiones pertinentes adoptadas por la Asamblea de los Estados Partes;

41. *Exhorta* a los Estados, las organizaciones internacionales, los particulares, las corporaciones y otras entidades a que hagan contribuciones voluntarias a la Corte y *expresa su agradecimiento* a quienes ya lo hayan hecho;

42. *Toma nota* del informe de la Mesa sobre los atrasos en los pagos de los Estados Partes¹⁰, *hace suyas* las recomendaciones del informe que figuran en anexo a la presente resolución¹¹ y decide que la Mesa examine con carácter regular la situación de los pagos recibidos a lo largo del ejercicio económico de la Corte y considere las medidas adicionales que procedan para promover los pagos de los Estados Partes;

43. *Pide* a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes que informe periódicamente a los Estados Partes de los Estados que han recuperado sus derechos de voto tras el pago de sus atrasos;

44. *Toma nota* del Manual de Procedimientos aprobado por la Mesa y publicado por la Asamblea de los Estados Partes;

⁹ Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, quinto período de sesiones, La Haya, 23 de noviembre a 1º de diciembre de 2006 (publicación de la Corte Penal Internacional, ICC-ASP/5/32) anexo II.

¹⁰ ICC-ASP/5/27.

¹¹ Anexo III.

45. *Acoge con satisfacción* la labor realizada por la Mesa y sus dos grupos de trabajo oficiosos e *invita* a la Mesa a que cree los mecanismos que considere apropiados e informe a la Asamblea de los Estados Partes sobre los resultados de su labor;
46. *Acoge asimismo con satisfacción* los esfuerzos de la Mesa por asegurar la comunicación y la cooperación entre sus órganos subsidiarios e *invita* a la Mesa a que continúe esos esfuerzos;
47. *Toma nota* del informe preliminar del coordinador sobre la cuestión de la Conferencia de Revisión¹², que se celebrará en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 del Estatuto de Roma, y *pide* a la Mesa que establezca el mecanismo adecuado para iniciar los preparativos de la Conferencia, en especial sobre las cuestiones del reglamento que le sea aplicable y sobre las cuestiones de tipo práctico y de organización, y que informe al siguiente período ordinario de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes acerca de la situación de esos preparativos;
48. *Decide* que el Comité de Presupuesto y Finanzas celebre su próximo período de sesiones en La Haya, del 23 al 26 de abril de 2007 y un nuevo período de sesiones de cinco días de duración que será decidido por el Comité;
49. *Recuerda* que según el párrafo 6 del artículo 112 del Estatuto de Roma, la Asamblea de los Estados Partes se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas;
50. *Reitera* su decisión de celebrar sus períodos de sesiones quinto, sexto y séptimo alternativamente en la forma siguiente:
- el quinto período de sesiones, durante ocho días en noviembre/diciembre de 2006, en La Haya, y una continuación del período de sesiones, de tres días como mínimo, del Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión, en 2007, en Nueva York;
 - el sexto período de sesiones durante 11 días como mínimo en 2007, en Nueva York, incluidos tres días como mínimo dedicados exclusivamente al Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión;
 - el séptimo período de sesiones, durante ocho días como mínimo en 2008, en La Haya, con una continuación del período de sesiones de dos días como mínimo en 2009 en Nueva York para las elecciones;
51. *Pide* a la Mesa que fije las fechas concretas e informe en consecuencia a los Estados Partes.

¹² ICC-ASP/5/INF.2.

Anexo I

Plan de acción de la Asamblea de los Estados Partes para conseguir la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Objetivos

1. La universalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es imperativa si queremos poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, contribuir a la prevención de esos crímenes y garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera.
2. La plena y eficaz aplicación del Estatuto de Roma por todos los Estados Partes es igualmente vital para la consecución de esos objetivos.

Estados Partes

3. Los Estados Partes tienen la responsabilidad primaria de promover los objetivos establecidos en los párrafos 1 y 2 *supra*. Los Estados deberían utilizar plenamente los medios políticos, financieros y técnicos de que disponen para continuar e intensificar sus esfuerzos en pro de la consecución de esos objetivos.
4. Con esta finalidad los Estados Partes deberían promover de forma proactiva la universalidad y la plena aplicación, incluso a través de relaciones bilaterales y regionales, mediante la elaboración de iniciativas que se centren en los Estados vecinos y en las regiones, subregiones u otras agrupaciones a las que pertenezcan, así como en los obstáculos particulares con que se enfrentan esos Estados, regiones, subregiones o agrupaciones.
5. Además, los Estados Partes deberían profundizar en su propio compromiso con la Corte y con el Estatuto de Roma a fin de asegurar una institución fuerte, eficaz y eficiente y estimular a otros Estados a adherirse.
6. Los esfuerzos de los Estados Partes deberían incluir:
 - a) los contactos directos políticos o de otra índole con los Estados, agrupaciones regionales u organizaciones regionales pertinentes con el objeto de promover la voluntad política y el apoyo a la ratificación y la plena aplicación del Estatuto de Roma;
 - b) cuando proceda, los esfuerzos por incluir un tema sobre la Corte en el programa de todo contacto bilateral, incluidos los contactos al más alto nivel, con Estados no partes;
 - c) la ratificación y plena aplicación del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunities de la Corte Penal Internacional y el fomento de su ratificación y aplicación por otros Estados que aún no son partes en el Acuerdo;
 - d) la prestación de asistencia técnica o financiera a los Estados que deseen convertirse en Partes en el Estatuto de Roma y a los Estados y otras entidades que deseen promover su universalidad;
 - e) la organización y el apoyo de seminarios, conferencias y otras manifestaciones nacionales, regionales o internacionales destinadas a promover la ratificación, la plena aplicación y el apoyo al Estatuto de Roma;

- f) una amplia difusión de información sobre la Corte y su función, considerando en particular la posibilidad de invitar a representantes de la Corte o de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes a que tomen la palabra en manifestaciones nacionales, regionales e internacionales;
- g) la identificación de puntos nacionales de contacto para cuestiones relacionadas con la promoción de la ratificación y la plena aplicación del Estatuto de Roma;
- h) el suministro a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes (“la Secretaría”) de información de interés para la promoción de la ratificación y plena aplicación del Estatuto de Roma, con inclusión, entre otras cosas, de:
- i) información sobre los obstáculos a la ratificación o la plena aplicación con que se enfrentan los Estados;
 - ii) las estrategias o planes de acción nacionales o regionales para promover la ratificación y/o la plena aplicación;
 - iii) las necesidades de asistencia técnica y de otra índole y los programas de prestación de esa asistencia;
 - iv) las manifestaciones y actividades previstas;
 - v) ejemplos de leyes de aplicación del Estatuto de Roma;
 - vi) acuerdos de cooperación bilateral entre la Corte y los Estados Partes;
 - vii) soluciones a los problemas constitucionales derivados de la ratificación;
 - viii) puntos nacionales de contacto para cuestiones relacionadas con la promoción de la ratificación y la plena aplicación.
- i) la plena y eficaz aplicación del Estatuto de Roma, incluido el deber de cooperación con la Corte. Con este fin, todo Estado que tenga dificultades para asegurar la plena aplicación debería definir con rapidez sus necesidades de asistencia a fin de obtener la asistencia técnica y/o financiera adecuada;
- j) la participación activa y el apoyo a las reuniones y actividades de la Asamblea de los Estados Partes y sus órganos subsidiarios a fin, entre otras cosas, de promover la asistencia de otros Estados Partes y de Estados que todavía no son partes a las reuniones de la Asamblea.

Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes

7. La Secretaría debería apoyar a los Estados en sus esfuerzos por promover la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma, actuando a tal fin como centro de coordinación del intercambio de información, dentro de los recursos existentes, a través de:

- a) la reunión y el cotejo de la información pertinente de los Estados Partes, las organizaciones regionales, los miembros de la comunidad no gubernamental y otros participantes interesados en promover la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma;
- b) la garantía de un acceso fácil y amplio a esa información y de su distribución a los Estados y a otros interesados.

Asamblea de los Estados Partes

8. La Asamblea, a través de su Mesa, debería mantener en examen este plan de acción por medio de la supervisión del estado de las ratificaciones del Estatuto de Roma, la evolución de las leyes de aplicación y la gama de obstáculos a la ratificación y plena aplicación con que tropiezan los Estados.

Anexo II

Acuerdo relativo a la Sede concertado entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión

Índice

	<i>Página</i>
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES	
Artículo 1 Términos empleados.....	441
Artículo 2 Finalidad y alcance del Acuerdo.....	442
 CAPÍTULO II. CONDICIÓN JURÍDICA DE LA CORTE	
Artículo 3 Condición jurídica y personalidad de la Corte.....	443
Artículo 4 Libertad de reunión.....	443
Artículo 5 Privilegios, inmunidades y facilidades de la Corte.....	443
Artículo 6 Inviolabilidad de los locales de la Corte.....	443
Artículo 7 Protección de los locales de la Corte y de sus proximidades....	444
Artículo 8 Legislación y autoridad sobre los locales de la Corte.....	444
Artículo 9 Servicios públicos para los locales de la Corte.....	445
Artículo 10 Bandera, emblema y distintivos.....	445
Artículo 11 Fondos, haberes y otros bienes	445
Artículo 12 Inviolabilidad de los archivos, documentos y materiales	446
Artículo 13 Facilidades de comunicación	446
Artículo 14 Exención de restricciones sobre los haberes financieros	446
Artículo 15 Exención de impuestos y derechos para la Corte y sus bienes.....	447
Artículo 16 Exención de restricciones a la importación y a la exportación	447
 CAPÍTULO III. PRIVILEGIOS, INMUNIDADES Y FACILIDADES ACORDADOS A LAS PERSONAS EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO	
Artículo 17 Privilegios, inmunidades y facilidades de los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario.....	448
Artículo 18 Privilegios, inmunidades y facilidades del Secretario Adjunto y del personal de la Corte	449
Artículo 19 Personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el presente Acuerdo.....	451
Artículo 20 Empleo de los miembros de la unidad familiar de los funcionarios de la Corte.....	451
Artículo 21 Representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte.....	451
Artículo 22 Representantes de Estados que participen en la Asamblea y sus órganos subsidiarios y representantes de organizaciones intergubernamentales.....	452
Artículo 23 Miembros de la Mesa y de los órganos subsidiarios	452
Artículo 24 Pasantes y profesionales invitados	453
Artículo 25 Abogados y personas que los asistan.....	454

Artículo 26	Testigos	455
Artículo 27	Víctimas	456
Artículo 28	Peritos.....	457
Artículo 29	Otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte	458

CAPÍTULO IV. RENUNCIA A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Artículo 30	Renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 ...	459
Artículo 31	Renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades de los representantes de los Estados y de los miembros de la Mesa previstos en los artículos 21, 22 y 23	459
Artículo 32	Renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades de los miembros de los órganos subsidiarios y de los peritos de la Asamblea, incluida su mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el artículo 23 y en el párrafo 6 del artículo 28.....	460

CAPÍTULO V. COOPERACIÓN ENTRE LA CORTE Y EL ESTADO ANFITRIÓN

SECCIÓN 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 33	Cooperación general entre la Corte y el Estado anfitrión.....	460
Artículo 34	Cooperación con las autoridades competentes	461
Artículo 35	Notificación.....	461
Artículo 36	Régimen de seguridad social.....	462

SECCIÓN 2: VISADOS, PERMISOS Y OTROS DOCUMENTOS

Artículo 37	Visados de los funcionarios de la Corte, los representantes de los Estados participantes en las actuaciones de la Corte y los abogados y las personas que les asistan	462
Artículo 38	Visados de los testigos, las víctimas, los peritos, los pasantes, los profesionales invitados y otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte.....	462
Artículo 39	Visados de los visitantes de las personas detenidas por la Corte	463
Artículo 40	Órganos independientes de colegios de abogados o asociaciones jurídicas, periodistas y organizaciones no gubernamentales	463
Artículo 41	Laissez-passer	464
Artículo 42	Permiso de conducir	464

SECCIÓN 3: SEGURIDAD Y ASISTENCIA OPERACIONAL

Artículo 43	Seguridad, vigilancia y protección de las personas a las que se refiere el presente Acuerdo.....	464
Artículo 44	Transporte de las personas detenidas	465
Artículo 45	Transporte de las personas que comparecen ante la Corte voluntariamente o en respuesta a un requerimiento	465
Artículo 46	Cooperación en cuestiones de detención.....	466
Artículo 47	Libertad provisional	466

Artículo 48	Puesta en libertad sin fallo condenatorio	466
Artículo 49	Ejecución de las penas en el Estado anfitrión.....	466
Artículo 50	Las detenciones de corta duración	467
Artículo 51	Limitación del ejercicio de la jurisdicción del Estado anfitrión	467

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52	Arreglos y acuerdos complementarios.....	468
Artículo 53	Trato no menos favorable	468
Artículo 54	Solución de controversias con terceros.....	468
Artículo 55	Solución de controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo o de los arreglos o acuerdos complementarios.....	468
Artículo 56	Aplicación.....	469
Artículo 57	Enmiendas y terminación	469
Artículo 58	Entrada en vigor.....	469

La Corte Penal Internacional y el Reino de los Países Bajos,

Considerando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional facultada para ejercer su competencia sobre personas por los crímenes más graves de trascendencia internacional;

Considerando los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Estatuto de Roma que respectivamente disponen que la sede de la Corte estará en La Haya (Países Bajos) y que la Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta;

Considerando que el artículo 4 del Estatuto de Roma prevé que la Corte tendrá personalidad jurídica internacional y también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos;

Considerando que el artículo 48 del Estatuto de Roma prevé que la Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

Considerando que el párrafo 4 del artículo 103 del Estatuto de Roma prevé que, de no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1 de ese artículo, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede;

Considerando que la Asamblea de los Estados Partes, en la tercera reunión de su primer período de sesiones celebrado del 3 al 10 de septiembre de 2002, aprobó los principios básicos del acuerdo relativo a la Sede que habrán de negociar la Corte y el Estado anfitrión y aprobó el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional;

Considerando que la Corte y el Estado anfitrión desean concluir un acuerdo para facilitar el funcionamiento regular y eficiente de la Corte en el Estado anfitrión;

Han *convenido* lo siguiente:

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Términos empelados

A los efectos del presente Acuerdo:

- a) por “el Estatuto” se entenderá el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional;
- b) por “la Corte” se entenderá la Corte Penal Internacional establecida por el Estatuto; a los efectos del presente Acuerdo, la Secretaría será parte integrante de la Corte;
- c) por “el Estado anfitrión” se entenderá el Reino de los Países Bajos;
- d) por “las partes” se entenderán la Corte y el Estado anfitrión;
- e) por “Estados Partes” se entenderán los Estados Partes en el Estatuto;
- f) por “representantes de los Estados” se entenderán todos los delegados, delegados adjuntos, asesores, peritos técnicos, secretarios y cualquier otro miembro o de las delegaciones acreditadas;
- g) por “la Asamblea” se entenderá la Asamblea de los Estados Partes;
- h) por “la Mesa” se entenderá la Mesa de la Asamblea;
- i) por “órganos subsidiarios” se entenderán los órganos establecidos por la Asamblea o la Mesa;
- j) por “funcionarios de la Corte” se entenderán los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario, el Secretario Adjunto y el personal de la Corte;
- k) por “los magistrados” se entenderán los magistrados de la Corte elegidos por la Asamblea de conformidad con el párrafo 6 del artículo 36 del Estatuto;
- l) por “la Presidencia” se entenderá el órgano integrado por el Presidente y los Vicepresidentes primero y segundo de la Corte de conformidad con el párrafo 3 del artículo 38 del Estatuto;
- m) por “el Presidente” se entenderá el Presidente de la Corte elegido por los magistrados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto;
- n) por “el Fiscal” se entenderá el Fiscal elegido por la Asamblea de conformidad con el párrafo 4 del artículo 42 del Estatuto;
- o) por “los Fiscales Adjuntos” se entenderán los Fiscales Adjuntos elegidos por la Asamblea de conformidad con el párrafo 4 del artículo 42 del Estatuto;
- p) por “el Secretario” se entenderá el Secretario elegido por los magistrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo 43 del Estatuto;
- q) por “el Secretario Adjunto” se entenderá el Secretario Adjunto elegido por los magistrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo 43 del Estatuto;
- r) por “personal de la Corte” se entenderán los funcionarios de la Secretaría y de la Fiscalía a que se refiere el artículo 44 del Estatuto. El personal de esta Secretaría incluye al personal de la Presidencia y de las Salas, así como al de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes;
- s) por “la Secretaría” se entenderá la Secretaría Permanente de la Asamblea establecida por la resolución ICC-ASP/2/Res.3 de fecha 12 de septiembre de 2003;

t) por “pasantes” se entenderán los graduados o posgraduados que, aun no siendo miembros del personal de la Corte, hayan sido aceptados por ésta en su programa de pasantías con objeto de que realicen determinadas tareas para la Corte sin recibir un sueldo de ésta;

u) por “profesionales invitados” se entenderán las personas que aun no siendo miembros del personal de la Corte, hayan sido aceptadas por ésta en su programa de profesionales invitados con objeto de ofrecer sus conocimientos técnicos y desempeñar determinadas tareas para la Corte sin recibir un sueldo de ésta;

v) por “abogados” se entenderán el abogado defensor y los representantes legales de las víctimas;

w) por “testigos”, “víctimas” y “peritos” se entenderán las personas designadas como tales por la Corte;

x) por “los locales de la Corte” se entenderán los edificios, partes de edificios y zonas, incluidas las instalaciones y servicios puestos a disposición de la Corte, mantenidos, ocupados o utilizados por ésta en el Estado anfitrión en relación con sus funciones y objetivos, incluida la detención de personas, o en relación con las reuniones de la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios;

y) por “el Ministerio de Relaciones Exteriores” se entenderá el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado anfitrión;

z) por “las autoridades competentes” se entenderán las autoridades nacionales, provinciales, municipales y demás autoridades competentes de conformidad con las leyes, reglamentos y costumbres del Estado anfitrión;

aa) por “el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte” se entenderá el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional a que hace referencia el artículo 48 del Estatuto y que se aprobó en la tercera reunión del primer período de sesiones de la Asamblea celebrado del 3 al 10 de septiembre de 2002 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York;

bb) por “la Convención de Viena” se entenderá la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961;

cc) por “Reglas de Procedimiento y Prueba” se entenderán las Reglas de Procedimiento y Prueba aprobadas de conformidad con el artículo 51 del Estatuto.

Artículo 2 **Finalidad y alcance del Acuerdo**

Este Acuerdo regulará las cuestiones relacionadas con el establecimiento y el adecuado funcionamiento de la Corte en el Estado anfitrión. Entre otras cosas permitirá la estabilidad e independencia a largo plazo de la Corte y facilitará su funcionamiento regular y eficiente, incluyendo, en particular, sus necesidades con relación a todas las personas cuya presencia se requiera en su Sede y con relación a la transferencia de la información, las pruebas existentes y otras posibles pruebas dentro y fuera del Estado anfitrión. Este Acuerdo regulará también las cuestiones relacionadas con el establecimiento y el adecuado funcionamiento de la Secretaría en el Estado anfitrión, y sus disposiciones se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la Secretaría. Este Acuerdo regulará, según proceda, las cuestiones relativas a la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios.

CAPÍTULO II CONDICIÓN JURÍDICA DE LA CORTE

Artículo 3 Condición jurídica y personalidad jurídica de la Corte

La Corte tendrá personalidad jurídica internacional de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 del Estatuto. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Tendrá en particular, capacidad jurídica para celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y participar en procedimientos judiciales.

Artículo 4 Libertad de reunión

1. El Estado anfitrión garantiza a la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios, la plena libertad de reunión, incluida la libertad de discusión, decisión y publicación.
2. El Estado anfitrión tomará las medidas necesarias para garantizar que no haya ningún impedimento para la celebración de las reuniones convocadas por la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios.

Artículo 5 Privilegios, inmunidades y facilidades de la Corte

La Corte gozará, en el territorio del Estado anfitrión, de los privilegios, inmunidades y facilidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.

Artículo 6 Inviolabilidad de los locales de la Corte

1. Los locales de la Corte serán inviolables. Las autoridades competentes tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que la Corte no sea desposeída o privada de la totalidad o parte de sus locales sin su consentimiento expreso.
2. Las autoridades competentes no podrán penetrar en los locales de la Corte para desempeñar ninguna misión oficial a no ser con el consentimiento expreso o a solicitud del Secretario o del funcionario que éste designe. Las decisiones judiciales y el cumplimiento o ejecución de los procesos legales, incluida la incautación de bienes privados, no podrán hacerse efectivos en los locales de la Corte a no ser con el consentimiento del Secretario y de conformidad con las condiciones aprobadas por él.
3. En caso de incendio u otra emergencia que exija medidas inmediatas de protección, o en el caso de que las autoridades competentes tengan motivo razonable para creer que se ha producido o está a punto de producirse una emergencia de ese tipo en los locales de la Corte, se presumirá el consentimiento del Secretario, o del funcionario que éste designe para realizar la necesaria entrada en los locales de la Corte si no ha sido posible comunicarse con ninguno de ellos a tiempo.
4. Sin perjuicio de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo, las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para proteger los locales de la Corte contra incendios u otras emergencias.
5. La Corte impedirá que sus locales sean utilizados como refugio por personas que traten de evitar una orden de detención o escapar de la administración de justicia en virtud de cualquier ley del Estado anfitrión.

Artículo 7

Protección de los locales de la Corte y de sus proximidades

1. Las autoridades competentes tomarán todas las medidas efectivas y adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la Corte y velar para que no se perturbe su tranquilidad por la intrusión de personas o grupos de personas procedentes del exterior, o por los disturbios que puedan producirse en las inmediaciones de los locales de la Corte, y prestará a dichos locales la protección adecuada que sea necesaria.
2. Previa solicitud del Secretario, las autoridades competentes facilitarán la fuerza de policía adecuada necesaria para mantener el orden público en los locales de la Corte o en sus inmediaciones, y para desalojar a las personas de su interior.
3. Las autoridades competentes tomarán todas las medidas razonables para garantizar que las instalaciones de los locales de la Corte no sean perjudicadas y que el propósito para el cual esos locales se requieren no se vea obstaculizado por ningún uso hecho del terreno o de los edificios próximos a los locales. La Corte tomará todas las medidas razonables para garantizar que las instalaciones existentes en los terrenos próximos a sus locales no se vean perjudicadas por ningún uso hecho del terreno o de los edificios de sus locales.

Artículo 8

Legislación y autoridad sobre los locales de la Corte

1. Los locales de la Corte estarán sometidos al control y a la autoridad de la Corte, conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2. A menos que se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, en los locales de la Corte se aplicarán las leyes y reglamentos del Estado anfitrión.
3. La Corte estará facultada para promulgar las normas aplicables en sus locales que sean necesarias para el pleno desempeño de sus funciones. La Corte informará inmediatamente a las autoridades competentes de la promulgación de esas normas. Ninguna ley o reglamento del Estado anfitrión que sea incompatible con las normas que promulgue la Corte en virtud de este párrafo será aplicable dentro de los locales de la Corte en la medida de esta incompatibilidad.
4. La Corte podrá expulsar o excluir de sus locales a las personas que violen sus normas e informará por anticipado a las autoridades competentes acerca de esas medidas.
5. Con sujeción a las normas mencionadas en el párrafo 3 de este artículo y de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado anfitrión, sólo se autorizará la tenencia de armas en los locales de la Corte al personal de la Corte.
6. El Secretario notificará al Estado anfitrión el nombre y la identidad de cada miembro del personal de la Corte autorizado a la tenencia de armas en los locales de la Corte, así como el nombre, tipo, calibre y número de serie del arma o de las armas de que se trate.
7. Cualquier controversia entre la Corte y el Estado anfitrión sobre si las normas de la Corte entran en el ámbito de esta disposición o si las leyes y reglamentos del Estado anfitrión son incompatibles con las normas que promulgue la Corte en virtud de esta disposición deberá solucionarse sin demora por el procedimiento previsto en el artículo 55 de presente Acuerdo. Hasta que se llegue a una solución, se aplicarán las normas de la Corte y las leyes y/o reglamentos del Estado anfitrión no serán aplicables en los locales de la Corte en la medida en que la Corte mantenga que son incompatibles con sus normas.

Artículo 9

Servicios públicos para los locales de la Corte

1. Las autoridades competentes asegurarán, a petición del Secretario o del funcionario de la Corte que éste designe, la prestación en condiciones equitativas de los servicios públicos que necesite la Corte, tales como los servicios postales, telefónicos y telegráficos, cualquier otro medio de comunicación, los servicios de electricidad, agua, gas, saneamiento, recogida de basura, protección contra incendios y limpieza de las calles públicas incluida la retirada de la nieve.
2. En los casos en que los servicios señalados en el párrafo 1 de este artículo sean prestados a la Corte por las autoridades competentes, o cuando los precios de tales servicios estén bajo el control de dichas autoridades, las tarifas de esos servicios no superarán las tarifas comparables más bajas otorgadas a los organismos y órganos esenciales del Estado anfitrión.
3. En caso de interrupción o amenaza de interrupción de alguno de esos servicios, se concederá a la Corte para el cumplimiento de sus funciones la prioridad otorgada a los organismos y órganos esenciales del Estado anfitrión, y éste tomará las medidas adecuadas para garantizar que la labor de la Corte no se vea perjudicada.
4. A petición de las autoridades competentes, el Secretario, o el funcionario de la Corte que éste designe, tomará las disposiciones adecuadas para permitir que representantes debidamente autorizados de los servicios públicos correspondientes inspecciones, reparen, conserven, reconstruyan y reubiquen servicios, canalizaciones, colectores y alcantarillas en los locales de la Corte en condiciones que no perturben de manera irracional el desempeño de las funciones de la Corte.
5. Las autoridades competentes sólo podrán realizar construcciones subterráneas en los locales de la Corte previa consulta del Secretario o del funcionario de la Corte que éste designe y en condiciones que no perturben el cumplimiento de las funciones de la Corte.

Artículo 10

Bandera, emblema y distintivos

La Corte podrá desplegar su bandera y exhibir su emblema y sus distintivos en sus locales y en los vehículos y otros medios de transporte que utilice para fines oficiales.

Artículo 11

Fondos, haberes y otros bienes

1. La Corte, sus fondos, haberes y otros bienes, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo en la medida en que, en un caso determinado, la Corte renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entenderá, sin embargo, que tal renuncia no será aplicable a ninguna medida de ejecución.
2. Los fondos, haberes y otros bienes de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de registro, requisa, confiscación y embargo, expropiación y de cualquier otra forma de interferencia de un órgano ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
3. En la medida en que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte, los fondos, haberes y otros bienes de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, estarán exentos de restricciones, reglamentaciones, controles o moratorias de toda índole.

Artículo 12
Inviolabilidad de los archivos, documentos y materiales

Los archivos de la Corte y todos los documentos, papeles y materiales, cualquiera sea su forma, que se envíen a la Corte o desde ésta, estén en poder de la Corte o le pertenezcan, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, serán inviolables. La terminación o ausencia de esa inviolabilidad no afectará a las medidas de protección que la Corte ordene de conformidad con el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba con respecto a los documentos y materiales utilizados por la Corte o puestos a su disposición.

Artículo 13
Facilidades de comunicación

1. A los efectos de su correspondencia y comunicaciones oficiales, la Corte gozará en el territorio del Estado anfitrión de un trato no menos favorable que el que éste conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables al franqueo postal y a las diversas formas de comunicación y correspondencia.
2. La correspondencia o las comunicaciones oficiales de la Corte no serán sometidas a censura alguna.
3. La Corte podrá utilizar todos los medios apropiados de comunicación, incluidos los electrónicos, y emplear claves o cifras para su correspondencia o comunicaciones oficiales. La correspondencia y comunicaciones oficiales de la Corte serán inviolables.
4. La Corte podrá despachar y recibir correspondencia y otras piezas o comunicaciones por correo o valija sellada, que gozarán de los mismos privilegios, inmunidades y facilidades que los correos y las valijas diplomáticas.
5. La Corte podrá operar equipos de radio y telecomunicación en las frecuencias que le asigne el Estado anfitrión, de conformidad con sus procedimientos nacionales. El Estado anfitrión asignará a la Corte, en la mayor medida posible, las frecuencias que haya solicitado.
6. Para el cumplimiento de sus propósitos y de sus responsabilidades, la Corte tendrá el derecho de publicación libre y sin restricciones dentro del Estado anfitrión de conformidad con el presente Acuerdo.

Artículo 14
Exención de restricciones sobre los haberes financieros

1. La Corte no estará sometida a controles financieros, reglamentos, requisitos de notificación de transacciones financieras, o moratorias de ningún tipo, y podrá libremente:
 - a) adquirir o enajenar cualquier divisa a través de los canales autorizados;
 - b) operar cuentas en cualquier moneda;
 - c) adquirir a través de los canales autorizados, poseer y enajenar fondos, valores y oro;
 - d) transferir sus fondos, oro y monedas desde o hacia el Estado anfitrión, de un país a otro o dentro del Estado anfitrión y convertir libremente sus monedas; y
 - e) recaudar fondos de la forma que considere apropiada; sin embargo, en los casos de recaudación de fondos dentro del Estado anfitrión, la Corte deberá obtener el acuerdo de las autoridades competentes.

2. La Corte gozará de un trato no menos favorable que el acordado por el Estado anfitrión a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de los tipos de cambio aplicables a sus transacciones financieras.

Artículo 15

Exención de impuestos y derechos para la Corte y sus bienes

1. En el ámbito de sus funciones oficiales, la Corte, sus haberes, ingresos y demás bienes estarán exentos de todos los impuestos directos, establecidos por las autoridades nacionales, provinciales o locales.

2. En el ámbito de sus funciones oficiales, la Corte estará exenta de:

a) los impuestos y derechos de importación y exportación (*belastingen bij invoer en uitvoer*);

b) el impuesto sobre los vehículos de motor (*motorrijtuigenbelasting, MRB*);

c) el impuesto sobre los automóviles y motocicletas particulares (*belasting van personenauto's en motorrijwielen, BPM*);

d) el impuesto sobre el valor añadido (*omzetbelasting, BTW*) aplicado a los bienes o servicios suministrados con carácter regular o que impliquen un gasto considerable;

e) los impuestos indirectos (*accijnzen*) incluidos en el precio de las bebidas alcohólicas y los hidrocarburos, tales como gasóleos y combustibles para vehículos;

f) el impuesto sobre las transmisiones de bienes inmuebles (*overdrachtsbelasting*);

g) el impuesto sobre seguros (*assurantiebelasting*);

h) el impuesto sobre la energía (*regulerende energiebelasting, REB*);

i) el impuesto sobre el suministro de agua (*belasting op leidingwater, BOL*);

j) cualquier otro impuesto o derecho de índole sustancialmente similar a los impuestos previstos en este párrafo, establecidos por el Estado anfitrión con posterioridad a la fecha de la firma de este Acuerdo.

3. Las exenciones previstas en los apartados d), e), f), g), h), i) y j) del párrafo 2, de este artículo podrán concederse en forma de reembolso.

4. Los bienes adquiridos o importados en las condiciones previstas en el párrafo 2 de este artículo no podrán venderse, cederse o enajenarse de ninguna forma, salvo de conformidad con las condiciones convenidas con el Estado anfitrión.

5. La Corte no podrá reclamar una exención del pago de los gravámenes que constituyan la remuneración de servicios públicos, prestados a una tarifa fija según la cantidad de los servicios prestados y que se puedan identificar, describir y desglosar.

Artículo 16

Exención de restricciones a la importación y a la exportación

La Corte estará exenta de todas las restricciones a la importación o a la exportación de los bienes que destine a uso oficial y de sus publicaciones.

CAPÍTULO III
PRIVILEGIOS, INMUNIDADES Y FACILIDADES ACORDADOS A
LAS PERSONAS EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO

Artículo 17
Privilegios, inmunidades y facilidades de los magistrados, el Fiscal,
los Fiscales Adjuntos y el Secretario

1. Los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario gozarán de privilegios, inmunidades y facilidades en el Estado anfitrión cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con las actividades de la Corte. Entre otras cosas gozarán de:

- a) inviolabilidad personal, incluida la inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad;
- b) inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa;
- c) inviolabilidad de todos sus papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma;
- d) exención de la obligación del servicio nacional;
- e) junto con los miembros de su unidad familiar, exención de las restricciones de inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros;
- f) exención de impuestos sobre los sueldos, los emolumentos y las prestaciones que perciban por su trabajo en la Corte;
- g) las mismas facilidades monetarias y cambiarias que se otorguen a los agentes diplomáticos;
- h) junto con los miembros de su unidad familiar, las mismas inmunidades y facilidades que se otorguen a los agentes diplomáticos en relación con su equipaje personal;
- i) junto con los miembros de su unidad familiar, las mismas facilidades de repatriación en caso de crisis internacional que se concedan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena;
- j) junto con los miembros de su unidad familiar, el derecho de entrar, salir y circular libremente dentro del Estado anfitrión, según proceda y para fines relacionados con la Corte.

2. Además de las privilegios, inmunidades y facilidades enumerados en el párrafo 1 de este artículo y los privilegios e inmunidades que se apliquen de conformidad con el párrafo 2 del artículo 48 del Estatuto, los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario, junto con los miembros de su unidad familiar que no tengan la nacionalidad neerlandesa o la residencia permanente en el Estado anfitrión, gozarán de los mismos privilegios, inmunidades y facilidades que se concedan por el Estado anfitrión a los jefes de las misiones diplomáticas de conformidad con la Convención de Viena.

3. Cuando la aplicación de un impuesto dependa de la residencia, los períodos en que los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario residan en el Estado anfitrión para el desempeño de sus funciones no se considerarán períodos de residencia.

4. Los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo se aplicarán también a los magistrados de la Corte que sigan en funciones de conformidad con el párrafo 10 del artículo 36 del Estatuto.

5. Los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario, después de la expiración de su mandato, continuarán gozando de todo tipo de inmunidad judicial por las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones oficiales.

6. El Estado anfitrión no estará obligado a exonerar del impuesto sobre la renta las pensiones o rentas pagadas a los ex magistrados, Fiscales, Fiscales Adjuntos y Secretarios y las personas a su cargo.

7. Sin perjuicio del apartado f) del párrafo 1 y del párrafo 3 del presente artículo, las personas a las cuales se hace referencia en este artículo que no sean nacionales ni residentes permanentes en el Estado anfitrión gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades solamente en la medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier forma de restricción de su libertad;

b) inmunidad judicial de todo tipo por las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones para la Corte; dicha inmunidad subsistirá incluso después de que hayan cesado en sus funciones para la Corte;

c) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales cualquiera sea su forma relativos al desempeño de sus funciones para la Corte;

d) a los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y despachar documentos cualquiera sea su forma;

e) el derecho a importar libres de gravámenes e impuestos, salvo los pagos por servicios prestados, sus muebles y efectos en el momento en que tomen posesión de su cargo en el Estado anfitrión.

Las personas a las que se hace referencia en este párrafo no serán sometidas por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar al desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte.

Artículo 18 **Privilegios, inmunidades y facilidades del Secretario Adjunto y del personal de la Corte**

1. El Secretario Adjunto y el personal de la Corte gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades que sean necesarios para el desempeño independiente de sus funciones. Gozarán de:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad, y contra la incautación de su equipaje personal;

b) inmunidad judicial de toda índole respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el ejercicio de sus funciones. Dicha inmunidad subsistirá incluso después de la terminación de su empleo de la Corte;

c) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera sea su forma;

d) exención de impuestos sobre los sueldos, emolumentos y prestaciones que perciban por su empleo en la Corte;

e) exención de las obligaciones del servicio nacional;

f) junto con los miembros de su unidad familiar, exención de las restricciones de inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros;

g) exención de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado anfitrión; en tales casos la inspección se llevará a cabo en presencia del funcionario en cuestión;

h) los mismos privilegios respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se otorguen a los funcionarios de grado comparable de las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado anfitrión;

i) junto con los miembros de su unidad familiar, las mismas facilidades de repatriación en tiempo de crisis internacional que se otorguen a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena;

j) el derecho a importar libres de gravámenes e impuestos, salvo los pagos por servicios prestados, sus muebles y efectos en el momento en que tomen posesión de su cargo en el Estado anfitrión, y a reexportar libres de gravámenes e impuestos esos muebles y efectos personales a su país de residencia permanente.

2. Se otorgarán a los funcionarios de la Corte de categoría P-5 y categorías superiores y a los de las categorías que designe el Secretario, de conformidad con el Estado anfitrión, y en consulta con el Presidente y el Fiscal, junto con los miembros de su unidad familiar que no sean nacionales ni residentes permanentes en el Estado anfitrión, los mismos privilegios, inmunidades y facilidades que el Estado anfitrión otorgue a los agentes diplomáticos de categoría equivalente de las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado anfitrión de conformidad con la Convención de Viena.

3. Se otorgarán a los funcionarios de categoría P-4 y categorías inferiores los mismos privilegios, inmunidades y facilidades que el Estado anfitrión otorgue al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado anfitrión, de conformidad con la Convención de Viena, a condición de que la inmunidad judicial penal y la inviolabilidad personal no se extiendan a los actos realizados al margen de sus funciones oficiales.

4. Cuando la aplicación de un impuesto dependa de la residencia, los períodos en que el Secretario Adjunto y el personal de la Corte estén presentes en el Estado anfitrión para el desempeño de sus funciones no se considerarán períodos de residencia.

5. El Estado anfitrión no estará obligado a exonerar del impuesto sobre la renta las pensiones o las rentas pagadas a los ex Secretarios Adjuntos, miembros del personal de la Corte y las personas a su cargo.

6. Sin perjuicio del apartado d) del párrafo 1 y del párrafo 4 del presente artículo, las personas a las que se hace referencia en este artículo que sean nacionales o residentes permanentes del Estado anfitrión gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades solamente en la medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad;

b) inmunidad judicial de todo tipo por las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito o los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones para la Corte; dicha inmunidad subsistirá incluso después que hayan cesado en sus funciones para con la Corte;

c) inviolabilidad de todos sus papeles, documentos y materiales cualquiera sea su forma, relativos al desempeño de sus funciones para la Corte;

d) a los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y despachar documentos cualquiera que sea su forma;

e) el derecho a importar libres de gravámenes e impuestos, salvo los pagos por servicios prestados, sus muebles y efectos en el momento en que tomen posesión de su cargo en el Estado anfitrión.

Las personas a las que se hace referencia en este párrafo no serán sometidas por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar el desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte.

Artículo 19
**Personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado
en el presente Acuerdo**

El personal contratado localmente por la Corte y que no esté de otro contemplado en el presente Acuerdo gozará de inmunidad judicial respecto de las declaraciones que haya hecho verbalmente o por escrito y los actos que haya realizado en el desempeño de sus funciones en la Corte. Dicha inmunidad subsistirá incluso después de que haya cesado en sus funciones. Durante el empleo también se le concederán las facilidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones en la Corte.

Artículo 20
Empleo de los miembros de la unidad familiar de los funcionarios de la Corte

1. Los miembros de la unidad familiar de los funcionarios de la Corte estarán autorizados a obtener un empleo remunerado en el Estado anfitrión durante el mandato del funcionario de la Corte en cuestión.

2. Estarán autorizadas a obtener un empleo remunerado en el Estado anfitrión las siguientes personas:

- a) los cónyuges o compañeros registrados de los funcionarios de la Corte;
- b) los hijos de los funcionarios de la Corte que sean menores de 18 años;
- c) los hijos de los funcionarios de la Corte mayores de 18 años, pero menores de 27 años, a condición de que hayan formado parte de la unidad familiar del funcionario antes de su primera entrada en el Estado anfitrión y de que sigan formando parte de esa unidad, no estén casados, sean financieramente dependientes del funcionario de la Corte en cuestión y asistan a una institución docente en el Estado anfitrión;
- d) cualquier otra persona que, en casos excepcionales o por razones humanitarias, la Corte y el Estado anfitrión acuerden tratar como miembro de la unidad familiar.

3. Las personas mencionadas en el párrafo 2 de este artículo que obtengan un empleo remunerado no gozarán de inmunidad de jurisdicción penal, civil o administrativa con respecto a las cuestiones que puedan plantearse durante su empleo o en relación con éste. Sin embargo, toda medida de ejecución se tomará sin infringir la inviolabilidad de su persona o de su residencia, si esas personas tienen derecho a tal inviolabilidad.

4. En caso de insolvencia de una persona menor de 18 años frente a una reclamación derivada del empleo remunerado de esa persona, los funcionarios de la Corte de cuya unidad familiar sea miembro la persona en cuestión no podrán invocar su inmunidad a efectos del pago de esa reclamación, de conformidad con las disposiciones del artículo 30 de este Acuerdo.

5. El empleo al que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo se ajustará a la legislación del Estado anfitrión, incluidas la legislación fiscal y la seguridad social.

Artículo 21
Representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte

1. Los representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte gozarán, durante el desempeño de sus funciones oficiales en el Estado anfitrión, de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades:

- a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad;
- b) inmunidad judicial de todo tipo por las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones; dicha inmunidad subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones como representantes;
- c) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma;
- d) el derecho a utilizar códigos o cifras y a recibir papeles y documentos o correspondencia y otros materiales o comunicaciones por correo o en valija sellada y a recibir y enviar comunicaciones electrónicas;
- e) exención de las restricciones de inmigración, las formalidades de registro de extranjeros y las obligaciones del servicio nacional;
- f) los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se otorguen a los representantes de los gobiernos extranjeros en misiones oficiales temporales;
- g) las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje personal que se otorguen a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena;
- h) la misma protección y las mismas facilidades de repatriación que se otorguen a los agentes diplomáticos en épocas de crisis internacional con arreglo a la Convención de Viena;
- i) los demás privilegios, inmunidades y facilidades que sean compatibles con los que anteceden y que se otorguen a los agentes diplomáticos, con la salvedad de que no podrán reclamar la exención del pago de derechos de aduana sobre las mercancías importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o del pago de impuestos indirectos o sobre las ventas.

2. Cuando la aplicación de un impuesto dependa de la residencia, los períodos en que los representantes a los que se refiere el párrafo 1 de este artículo estén presentes en el Estado anfitrión para el desempeño de sus funciones no se considerarán períodos de residencia.

3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este artículo no será aplicable entre un representante y las autoridades del Estado anfitrión si el representante tiene la nacionalidad o la residencia permanente en el Estado anfitrión o si es o ha sido representante del Estado anfitrión.

4. Los representantes de los Estados a los que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar al desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte.

Artículo 22

Representantes de Estados que participen en la Asamblea y sus órganos subsidiarios y representantes de organizaciones intergubernamentales

Los representantes de los Estados Partes que asistan a reuniones de la Asamblea, de la Mesa y de los órganos subsidiarios, los representantes de otros Estados que asistan a esas reuniones como observadores de conformidad con el párrafo 1 del artículo 112 del Estatuto, y los representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales invitados a esas reuniones gozarán, durante el desempeño de sus funciones oficiales y durante su viaje de ida y vuelta al lugar de la reunión, de los privilegios, inmunidades y facilidades enumeradas en el artículo 21 de este Acuerdo.

Artículo 23

Miembros de la Mesa y de los órganos subsidiarios

Las disposiciones que figuran en el artículo 21 de este Acuerdo se aplicarán, *mutatis mutandis*, a los miembros de la Mesa y a los miembros de los órganos subsidiarios de la Asamblea

cuya presencia se requiera en el Estado anfitrión, en relación con los trabajos de la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios.

Artículo 24 **Pasantes y profesionales invitados**

1. En los ocho días siguientes a la llegada por primera vez al Estado anfitrión de pasantes o de profesionales invitados, la Corte solicitará su inscripción en el Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con el párrafo 2 de este artículo.

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores inscribirá a los pasantes o profesionales invitados por un período máximo de un año, a condición de que la Corte suministre al Ministerio de Relaciones Exteriores una declaración firmada por ellos y acompañada de los justificantes oportunos, en los que se haga constar que:

a) el pasante o el profesional invitado entraron en el Estado anfitrión de conformidad con los procedimientos de inmigración aplicables;

b) el pasante o el profesional invitado disponen de medios financieros suficientes para su subsistencia y para su repatriación, así como de un seguro médico suficiente (que cubra como mínimo los gastos de hospitalización por toda la duración de sus programas respectivos más un mes) y un seguro de responsabilidad civil y que, por consiguiente, no estará a cargo del erario público en el Estado anfitrión;

c) el pasante o el profesional invitado no realizará para la Corte en el Estado anfitrión mientras dure su programa trabajos distintos de aquellos para los que fue invitado;

d) el pasante o el profesional invitado no se hará acompañar de ningún miembro de su familia durante su residencia en el Estado anfitrión sino de conformidad con los procedimientos de inmigración aplicables;

e) el pasante o el profesional invitado abandonará el Estado anfitrión en un plazo de 15 días a partir del término de su programa.

3. Tras proceder a su inscripción en los términos del párrafo 2 del presente artículo, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregará una tarjeta de identidad al pasante o al profesional invitado.

4. La Corte no asumirá responsabilidad alguna por los perjuicios resultantes del incumplimiento de las condiciones de la declaración a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo por los pasantes o profesionales invitados inscritos de conformidad con ese párrafo.

5. Los pasantes y los profesionales invitados no gozarán de privilegios, inmunidades y facilidades, a excepción de:

a) la inmunidad judicial respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y a los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones para la Corte; dicha inmunidad subsistirá incluso después de terminado su programa por las actividades realizadas en nombre de la Corte;

b) la inviolabilidad de los documentos, papeles y materiales, cualquiera sea su forma, relacionados con el desempeño de sus funciones para la Corte.

6. La Corte notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores la salida definitiva del pasante o del profesional invitado del Estado anfitrión en los ocho días siguientes a esa salida y al mismo tiempo devolverá la tarjeta de identidad del pasante o del profesional invitado.

En circunstancias excepcionales el período máximo de un año mencionado en el párrafo 2 de este artículo se podrá prorrogar una sola vez por un máximo de otro año.

Artículo 25
Abogados y personas que los asistan

1. Los abogados gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades en la medida necesaria para el ejercicio independiente de sus funciones, y siempre que exhiban el certificado a que se hace referencia en el párrafo 2 de este artículo:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad respecto de los actos o convicciones previos a su entrada en el territorio del Estado anfitrión;

b) inmunidad contra la incautación de su equipaje personal;

c) inmunidad judicial de todo tipo respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones; dicha inmunidad subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones;

d) inviolabilidad de todos sus papeles, documentos y materiales cualquiera que sea su forma relacionados con el desempeño de sus funciones;

e) a los efectos de las comunicaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones de abogados, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera sea su forma;

f) junto con los miembros de su unidad familiar, exención de las restricciones de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros;

g) exención de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibido por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado anfitrión; en cuyo caso se hará una inspección en presencia del abogado interesado;

h) los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se otorguen a los representantes de gobiernos extranjeros en misión temporal oficial;

i) las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se otorguen a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena.

2. Una vez designado un abogado de conformidad con el Estatuto, las Reglas de Procedimiento y Prueba y el Reglamento de la Corte, se le extenderá un certificado firmado por el Secretario, por el período necesario para el ejercicio de sus funciones. Este certificado se retirará si se pone término al poder o al mandato antes de que expire el certificado.

3. Cuando la aplicación de un impuesto dependa de la residencia, los períodos durante los cuales el abogado se encuentre en el Estado anfitrión para el desempeño de sus funciones no se considerarán períodos de residencia.

4. Los abogados que sean nacionales o residentes permanentes del Estado anfitrión gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades solamente en la medida necesaria para el ejercicio independiente de sus funciones ante la Corte:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad;

b) inmunidad judicial de todo tipo respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones;

c) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma relacionados con el desempeño de sus funciones;

d) a efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma.

5. Los abogados no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar al desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte.

6. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará, *mutatis mutandis*, a las personas que asistan a los abogados de conformidad con la regla 22 de la Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 26 Testigos

1. Se reconocerán a los testigos, en la medida necesaria para su comparecencia ante la Corte con el fin de prestar declaración, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción a su libertad con respecto a actos o convicciones anteriores a su entrada en el territorio del Estado anfitrión;

b) inmunidad contra la incautación de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado anfitrión;

c) inmunidad judicial de todo tipo respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el curso de su testimonio, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido y prestado testimonio ante la Corte;

d) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma, relacionados con su testimonio;

e) a los efectos de sus comunicaciones con la Corte y sus abogados en relación con su testimonio, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma;

f) exención de las restricciones de inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros cuando viajen por razón de su comparecencia para prestar declaración;

g) las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena.

2. La Corte extenderá a nombre de los testigos un documento en el que se certifique que deben comparecer ante la Corte y se especifique el período durante el cual esa comparecencia es necesaria. Este documento será retirado antes de su expiración si la comparecencia ante la Corte del testigo o su presencia en la sede de la Corte ya no es necesaria.

3. Los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en el párrafo 1 de este artículo cesarán de aplicarse transcurridos 15 días a partir de la fecha desde la que la Corte no requiera la presencia del testigo en cuestión siempre que dicho testigo haya tenido la posibilidad de abandonar el Estado anfitrión durante ese período.

4. Los testigos que sean nacionales o residentes permanentes del Estado anfitrión gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades solamente en la medida necesaria para su comparecencia o testimonio ante la Corte:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad;

b) inmunidad judicial de todo tipo respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito durante su comparecencia o testimonio; dicha inmunidad subsistirá incluso después de su comparecencia o testimonio;

c) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma, relacionados con su comparecencia o deposición;

d) a los efectos de sus comunicaciones con la Corte y con su abogado en relación con su comparecencia o testimonio, el derecho a recibir y a enviar papeles, cualquiera que sea su forma.

5. Los testigos no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar su comparecencia o testimonio ante la Corte.

Artículo 27 **Víctimas**

1. Se reconocerán a las víctimas que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con las reglas 89 a 91 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, en la medida necesaria para su comparecencia ante la Corte, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad respecto a actos o convicciones anteriores a su entrada en el territorio del Estado anfitrión;

b) inmunidad contra la incautación de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado anfitrión;

c) inmunidad judicial de todo tipo respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y de los actos que hayan realizado en el transcurso de su comparecencia ante la Corte, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido ante la Corte;

d) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma, relacionados con su participación en las actuaciones ante la Corte;

e) exención de las restricciones de inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros cuando viajen a la Corte por razón de su comparecencia.

2. La Corte extenderá a nombre de las víctimas que participen en las actuaciones judiciales un documento que certifique su participación en las actuaciones de la Corte y especifique la duración de esa participación. Ese documento será retirado antes de su expiración si la víctima ya no participa en las actuaciones de la Corte, o si la presencia de la víctima en la sede de la Corte ya no es necesaria.

3. Los privilegios, inmunidades y facilidades descritos en el párrafo 1 del presente artículo cesarán de aplicarse transcurridos 15 días a partir de la fecha desde la que la Corte no considere necesaria la presencia de la víctima en cuestión, siempre que dicha víctima haya tenido la posibilidad de abandonar el Estado anfitrión durante ese período.

4. Las víctimas que sean nacionales o residentes permanentes del Estado anfitrión gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades siguientes solamente en la medida en que sea necesario para su comparecencia ante la Corte, la inmunidad judicial respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el curso de su comparecencia ante la Corte, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido ante la Corte.

5. Las víctimas no serán sometidas por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar su comparecencia ante la Corte.

Artículo 28

Peritos

1. Se reconocerá a los peritos que desempeñen funciones para la Corte, incluido el personal a título gratuito, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades en la medida necesaria para el ejercicio independiente de sus funciones, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal y cualquiera otra forma de restricción de su libertad en relación con actos o convicciones anteriores a su entrada en el territorio del Estado anfitrión;

b) inmunidad contra la incautación de su equipaje personal;

c) inmunidad judicial de todo tipo respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado durante el desempeño de sus funciones para la Corte, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en dichas funciones;

d) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma, relacionados con el desempeño de sus funciones para la Corte;

e) a los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y enviar papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma, relacionados con sus funciones para la Corte por correo o en valija sellada;

f) exención de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado anfitrión; en cuyo caso se hará una inspección en presencia del propio perito;

g) los mismos privilegios respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal;

h) las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena;

i) exención de las restricciones de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros en relación con sus funciones, como se especifica en el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

2. La Corte extenderá a nombre de los peritos un documento que certifique que están ejerciendo funciones para la Corte y especifique la duración de dichas funciones. Ese documento se retirará antes de su expiración si el perito ya no ejerce funciones para la Corte, o si su presencia en la sede de la Corte ya no es necesaria.

3. Los privilegios, inmunidades y facilidades a los que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo cesarán de aplicarse transcurridos 15 días a partir de la fecha desde la que la Corte no considere necesaria la presencia del perito en cuestión, siempre que dicho perito haya tenido la posibilidad de abandonar el Estado anfitrión durante ese período.

4. Los peritos que sean nacionales o residentes permanentes del Estado anfitrión gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades solamente en la medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su comparecencia o testimonio ante la Corte:

a) inmunidad contra el arresto o la detención personal o cualquier otra forma de restricción de su libertad;

b) inmunidad judicial de todo tipo respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y de los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones ante

la Corte o durante su comparecencia o deposición, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el desempeño de sus funciones ante la Corte o después de su comparecencia o testimonio ante ella;

c) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y materiales, cualquiera que sea su forma, relacionados con el desempeño de sus funciones ante la Corte o su comparecencia o testimonio ante ella;

d) a los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y enviar papeles, cualquiera que sea su forma.

5. Los peritos no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que afecte la independencia del desempeño de sus funciones para la Corte.

6. Este artículo se aplicará, *mutatis mutandis*, a los peritos de la Asamblea, incluida su Mesa y los órganos subsidiarios, cuya presencia se requiera en el Estado anfitrión, en relación con los trabajos de la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios.

Artículo 29

Otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte

1. Se reconocerán a las demás personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte, en la medida necesaria para su presencia en dicha Sede, los privilegios, inmunidades y facilidades que se indican en el artículo 27 del presente Acuerdo, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

2. La Corte extenderá a nombre de las personas a que se hace referencia en el presente artículo, un documento que certifique que se requiere su presencia en la sede de la Corte y especifique la duración de esa presencia. Ese documento se retirará antes de su expiración cuando ya no sea necesaria la presencia en la sede de la Corte de esas personas.

3. Los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo cesarán de aplicarse transcurridos 15 días a partir de la fecha desde la cual no se considere necesaria la presencia de esas personas en la Corte, siempre que dichas personas hayan tenido la posibilidad de abandonar el Estado anfitrión durante ese período.

4. Las personas a las que se hace referencia en el presente artículo que sean nacionales o residentes del Estado anfitrión gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, solamente en la medida necesaria para su presencia en la sede de la Corte: inmunidad judicial respecto de las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el transcurso de su presencia en la sede de la Corte. Esa inmunidad subsistirá incluso cuando ya no sea necesaria su presencia en la sede de la Corte.

5. Las personas a las que se hace referencia en el presente artículo no serán sometidas por el Estado anfitrión a ninguna medida que afecte a su presencia ante la Corte.

CAPÍTULO IV RENUNCIA A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Artículo 30

Renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 y 29

1. Los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del presente Acuerdo se reconocen en interés de la administración de justicia y no en beneficio personal. Podrá renunciarse a ellos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 48 del Estatuto y con lo dispuesto en el presente artículo, y se tendrá la obligación de hacerlo en un caso determinado cuando puedan constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen.
2. Se podrá renunciar a los privilegios, inmunidades y facilidades:
 - a) por mayoría absoluta de los magistrados:
 - i) en el caso de un magistrado o del Fiscal;
 - b) por la Presidencia:
 - i) en el caso del Secretario;
 - ii) en el caso del abogado y de las personas que le asistan;
 - iii) en el caso de los testigos y de las víctimas; o
 - iv) en el caso de las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte;
 - c) por el Fiscal:
 - i) en el caso de los Fiscales Adjuntos y del personal de la Fiscalía; o
 - ii) en el caso de los pasantes y de los profesionales invitados de la Fiscalía;
 - d) por el Secretario:
 - i) en el caso del Secretario Adjunto y del personal de la Secretaría;
 - ii) en el caso de los pasantes y de los profesionales invitados no cubiertos por inciso ii) del apartado c) y por apartado g) del párrafo 2 del presente artículo;
 - e) por el jefe del órgano de la Corte que los haya designado, en el caso de las personas a que se hace referencia en el artículo 19 del presente Acuerdo;
 - f) por el Presidente de la Asamblea en el caso del Director de la Secretaría;
 - g) por el Director de la Secretaría en el caso del personal, los expertos, los pasantes y los profesionales invitados de la Secretaría;
 - h) por el jefe del órgano de la Corte que los haya nombrado, en el caso de los peritos.

Artículo 31

Renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades de los representantes de los Estados y de los miembros de la Mesa previstos en los artículos 21, 22 y 23

Los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en los artículos 21, 22 y 23 del presente Acuerdo no se otorgan a los representantes de los Estados y a los miembros de la Mesa y de las organizaciones intergubernamentales en beneficio personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios y la Corte. En consecuencia, los Estados Partes en el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte no sólo tienen el derecho, sino la obligación de renunciar a

los privilegios, inmunidades y facilidades de sus representantes en todos los casos en que, en opinión de dichos Estados, esos privilegios, inmunidades y facilidades puedan constituir un obstáculo a la justicia y sea posible la renuncia a los mismos sin perjuicio del fin para el cual se reconocen. Los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en los artículos 21, 22 y 23 del presente Acuerdo se conceden a los Estados que no sean partes en el mismo y a las organizaciones intergubernamentales en el entendimiento de que asumirán las mismas obligaciones con respecto a la renuncia.

Artículo 32

Renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades de los miembros de los órganos subsidiarios y de los peritos de la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el artículo 23 y en el párrafo 6 del artículo 28

Los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en el artículo 23 y en el párrafo 6 del artículo 28 del presente Acuerdo no se otorgan a los miembros de los órganos subsidiarios ni a los peritos respectivamente en beneficio personal sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios, y la Corte. En consecuencia, el Presidente de la Asamblea tiene no sólo el derecho sino la obligación de renunciar a los privilegios, inmunidades y facilidades de los miembros de los órganos subsidiarios o de los peritos en todos los casos en que, a juicio del Presidente de la Asamblea, puedan constituir un obstáculo a la justicia y sea posible la renuncia a los mismos sin perjuicio del fin para el cual se reconocen.

CAPÍTULO V

COOPERACIÓN ENTRE LA CORTE Y EL ESTADO ANFITRIÓN

Sección 1: Disposiciones generales

Artículo 33

Cooperación general entre la Corte y el Estado anfitrión

1. Cuando el presente Acuerdo imponga obligaciones a las autoridades competentes, la responsabilidad del cumplimiento de esas obligaciones recaerá en última instancia en el Gobierno del Estado anfitrión.
2. El Estado anfitrión notificará sin demora a la Corte la oficina designada para servir de punto de contacto oficial y asumir la responsabilidad principal de todas las cuestiones relacionadas con este Acuerdo, así como los cambios ulteriores que se produzcan al respecto.
3. Sin perjuicio de las facultades reconocidas al Fiscal en el párrafo 2 del artículo 42 del Estatuto, el Secretario o el funcionario de la Corte que éste designe actuará de funcionario de enlace oficial con el Estado anfitrión y asumirá la responsabilidad principal de todas las cuestiones relacionadas con el presente Acuerdo. El Estado anfitrión será informado rápidamente de este nombramiento y de los cambios que ulteriormente se produzcan al respecto.
4. Sin perjuicio de las funciones y facultades de la Asamblea, incluida su Mesa y sus órganos subsidiarios, la Corte pondrá el mayor empeño en facilitar el cumplimiento de los artículos 21, 22, 23, 31 y 32 del presente Acuerdo.
5. Las comunicaciones relacionadas con la Asamblea y el Estado anfitrión sobre la renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el artículo 32 del presente Acuerdo se transmitirán por conducto de la Secretaría.

Artículo 34 **Cooperación con las autoridades competentes**

1. La Corte cooperará con las autoridades competentes para facilitar el cumplimiento de las leyes del Estado anfitrión, garantizar la observancia de las normas de policía e impedir abusos en relación con los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el presente Acuerdo.
2. La Corte y el Estado anfitrión cooperarán en cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta el orden público y la seguridad nacional del Estado anfitrión.
3. Todas las personas tendrán la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado anfitrión, sin perjuicio de los privilegios, inmunidades y facilidades de que esas personas puedan disfrutar. Tendrán igualmente la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado anfitrión.
4. La Corte cooperará con las autoridades competentes responsables de la salud, la seguridad en el trabajo, las comunicaciones electrónicas y la prevención de incendios.
5. La Corte observará todas las directrices de seguridad que haya acordado con el Estado anfitrión, al igual que las directrices de las autoridades competentes responsables de las normas de prevención de incendios.
6. El Estado anfitrión pondrá el máximo empeño en notificar a la Corte las leyes y reglamentos nacionales que haya propuesto o promulgado y que tengan una repercusión directa en los privilegios, inmunidades, facilidades, derechos y obligaciones de la Corte y sus funcionarios. La Corte tendrá el derecho de formular observaciones sobre esas leyes y reglamentos.

Artículo 35 **Notificación**

1. La Corte notificará sin demora al Estado anfitrión:
 - a) el nombramiento de sus funcionarios, su llegada y su partida al término de sus funciones en la Corte;
 - b) la llegada y la partida definitiva de los miembros de la unidad familiar de las personas a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 del presente artículo y en su caso, el hecho de que alguna persona haya dejado de ser parte de esa unidad familiar;
 - c) la llegada y la partida definitiva de los servidores domésticos o privados de las personas a las que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 de este artículo y, en su caso, el hecho de que hayan dejado de ser empleados de esas personas.
2. El Estado anfitrión entregará a los funcionarios de la Corte y a los miembros de su unidad familiar, así como a los servidores privados o domésticos, una tarjeta de identidad con la fotografía de su titular. Esta tarjeta servirá para identificar a su titular ante las autoridades competentes.
3. En el momento de la partida de las personas a las que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo o cuando esas personas hayan dejado de desempeñar sus funciones, la tarjeta de identidad citada en dicho párrafo 2 será devuelta sin demora por la Corte al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 36
Régimen de seguridad social

1. El régimen de seguridad social de la Corte ofrece una cobertura comparable a la que brinda la legislación del Estado anfitrión. En consecuencia, las disposiciones de seguridad social del Estado anfitrión no se aplicarán a la Corte ni a sus funcionarios cubiertos por el mencionado régimen. Por consiguiente, esos funcionarios no estarán cubiertos contra los riesgos descritos en las disposiciones de seguridad social del Estado anfitrión. La exención se aplicará a esos funcionarios, a menos que inicien una actividad remunerada en el Estado anfitrión.
2. El párrafo 1 del presente artículo se aplicará, *mutatis mutandis*, a los miembros de la unidad familiar de las personas a que se refiere el párrafo 1, a menos que ejerzan una actividad remunerada en el Estado anfitrión, sean trabajadores por cuenta propia o reciban prestaciones de seguridad social del Estado anfitrión.

Sección 2: Visados, permisos y otros documentos

Artículo 37

Visados de los funcionarios de la Corte, los representantes de los Estados participantes en las actuaciones de la Corte y los abogados y las personas que les asistan

1. Los funcionarios de la Corte, los representantes de los Estados que participen en las actuaciones de la Corte y los abogados y las personas que les asistan, cuyos nombres hayan sido notificados al Estado anfitrión por el Secretario, tendrán el derecho a entrar, salir y circular libremente por el Estado anfitrión, incluido el derecho de acceder sin impedimento alguno a los locales de la Corte.
2. Los visados que sean necesarios se concederán sin demora y a título gratuito.
3. Las solicitudes de los visados necesarios para los miembros de la unidad familiar de las personas a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo se tramitarán por el Estado anfitrión con la mayor rapidez posible y a título gratuito.

Artículo 38

Visados de los testigos, las víctimas, los peritos, los pasantes, los profesionales invitados y otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte

1. Todas las personas a que se hace referencia en los artículos 24, 26, 27, 28 y 29 del presente Acuerdo, cuyos nombres hayan sido notificados al Estado anfitrión por el Secretario, tendrán el derecho a entrar, salir y circular libremente por el Estado anfitrión, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo, según proceda y para los fines de la Corte.
2. Los visados que sean necesarios se concederán sin demora y a título gratuito. Las mismas facilidades se concederán a las personas que acompañan a las víctimas y a los testigos, cuyos nombres hayan sido notificados por el Secretario al Estado anfitrión.
3. El Estado anfitrión impondrá a los visados las condiciones o restricciones que considere necesarias para impedir las violaciones de su orden público o para proteger la seguridad de la persona en cuestión.
4. Antes de aplicar el párrafo 3 del presente artículo, el Estado anfitrión recabará los comentarios de la Corte.

Artículo 39

Visados de los visitantes de las personas detenidas por la Corte

1. El Estado anfitrión tomará las disposiciones oportunas para tramitar con rapidez los visados de los visitantes de las personas detenidas por la Corte. Los visados de los visitantes que sean familiares de esas personas se tramitarán con rapidez y, en su caso, a título gratuito o a una tasa reducida.
2. Los visados de los visitantes a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo podrán estar sometidos a limitaciones territoriales. Se podrán denegar los visados en los casos de que:
 - a) los visitantes a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo no puedan presentar documentos que justifiquen la finalidad y las condiciones de la estancia pretendida y que acrediten que disponen de medios de subsistencia suficientes tanto para el período de la estancia pretendida como para el regreso al país de origen o el tránsito a un tercer Estado en el que tengan la certeza de ser admitidos, o que estén en condiciones de adquirir legalmente esos medios;
 - b) se hayan dado sus datos personales a los efectos de denegarles la entrada; o
 - c) se les deba considerar una amenaza al orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de cualquiera de las Partes Contratantes en el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica del Benelux, la República Federal de Alemania y la República Francesa sobre la supresión gradual de los controles en sus fronteras comunes.
3. El Estado anfitrión podrá imponer a los visados las condiciones y las restricciones que considere necesarias para impedir la violación de su orden público o para proteger la seguridad de la persona en cuestión.
4. Antes de aplicar los párrafos 2 ó 3 del presente artículo, el Estado anfitrión recabará los comentarios de la Corte.

Artículo 40

Órganos independientes de colegios de abogados o asociaciones jurídicas, periodistas y organizaciones no gubernamentales

1. Las partes reconocen la función de:
 - a) los órganos representativos independientes de colegios de abogados o asociaciones jurídicas, incluido todo órgano cuyo establecimiento pueda ser facilitado por la Asamblea de los Estados Partes de conformidad con el párrafo 3 de la regla 20 de las Reglas de Procedimiento y Prueba;
 - b) la prensa, la radio, el cine, la televisión u otros medios de comunicación que informan sobre la Corte; y
 - c) las organizaciones no gubernamentales que apoyan el cumplimiento del mandato de la Corte.
2. El Estado anfitrión adoptará todas las medidas necesarias para facilitar la entrada, estancia y empleo en su territorio de los representantes de los órganos u organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo, que se hayan desplazado o lo visiten en conexión con actividades relacionadas con la Corte. El Estado anfitrión adoptará igualmente todas las medidas necesarias para facilitar la entrada y la estancia en su territorio de los miembros de la unidad familiar de esos representantes.

3. A los efectos de facilitar el procedimiento de entrada, estancia y empleo en el Estado anfitrión de los representantes de los órganos u organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo, el Estado anfitrión y la Corte se consultarán mutuamente según proceda y evacuarán asimismo consultas con los órganos representativos independientes de los colegios de abogados y de las asociaciones jurídicas, los medios de comunicación o las organizaciones no gubernamentales. Cada uno de los grupos a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo notificará sin demora al Estado anfitrión y a la Corte la oficina que haya designado para actuar como punto de contacto oficial de ese grupo a los efectos de tales consultas, así como cualquier cambio ulterior que se produzca a este respecto.

4. Concluidas las consultas a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo, la Corte indicará, sobre la base de la información verificable de que disponga, si el representante en cuestión puede ser considerado representante del órgano u organización a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo.

5. El Estado anfitrión impondrá a los visados las condiciones o restricciones que considere necesarias para impedir violaciones de su orden público y para proteger la seguridad de la persona en cuestión.

6. Los visados y los permisos de residencia se concederán a las personas a que se hace referencia en este artículo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado anfitrión, teniendo en cuenta las obligaciones de dicho Estado a las que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

7. Los visados y permisos de residencia que se concedan de conformidad con el presente artículo se emitirán con la mayor rapidez posible.

Artículo 41 ***Laissez-passer***

El Estado anfitrión reconocerá y aceptará como documentos de viaje válidos los *laissez-passer* de las Naciones Unidas o los documentos de viaje expedidos por la Corte a sus funcionarios.

Artículo 42 **Permiso de conducir**

Durante el período de su empleo, los funcionarios de la Corte, los miembros de su unidad familiar y sus servidores privados o domésticos podrán obtener en el Estado anfitrión un permiso de conducir contra la presentación de su permiso nacional válido o continuar conduciendo con su propio permiso nacional, siempre que el titular esté en posesión de una tarjeta de identidad emitida por el Estado anfitrión de conformidad con el artículo 35 del presente Acuerdo.

Sección 3: Seguridad y asistencia operacional

Artículo 43 **Seguridad, vigilancia y protección de las personas a las que se refiere el presente Acuerdo**

1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas efectivas y adecuadas que sean necesarias para garantizar la seguridad, la vigilancia y la protección de las personas a las que se hace referencia en el presente Acuerdo, que sean indispensables para que la Corte pueda funcionar adecuadamente y libre de interferencias de todo tipo.

2. La Corte cooperará con las autoridades competentes para garantizar que todas las personas a las que se hace referencia en el presente Acuerdo observan las directrices necesarias para su seguridad y protección, dictadas por las autoridades competentes.

3. Todas las personas a las que se hace referencia en el presente Acuerdo estarán obligadas, sin perjuicio de los privilegios, inmunidades y facilidades de que disfruten, a respetar las directrices necesarias para su seguridad y protección, dictadas por las autoridades competentes.

Artículo 44

Transporte de las personas detenidas

1. El transporte de conformidad con el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba de una persona detenida desde el punto de llegada al Estado anfitrión a los locales de la Corte se hará, a petición de la Corte, por las autoridades competentes en consulta con la Corte.

2. El transporte de conformidad con el Estatuto y en las Reglas de Procedimiento y Prueba de una persona detenida desde los locales de la Corte hasta el punto de salida del Estado anfitrión se hará, a petición de la Corte, por las autoridades competentes en consulta con la Corte.

3. Todo transporte de personas detenidas en el Estado anfitrión fuera de los locales de la Corte se hará, a petición de la Corte, por las autoridades competentes en consulta con la Corte.

4. La Corte dará un preaviso razonable a las autoridades competentes de la llegada de las personas a las que se hace referencia en este artículo. Siempre que sea posible, el preaviso se dará con 72 horas de antelación.

5. Cuando el Estado anfitrión reciba la petición a que refiere el presente artículo e identifique la existencia de problemas en relación con el cumplimiento de esa petición, entablará sin demora consultas con la Corte con objeto de resolver la cuestión. Esos problemas pueden ser, entre otros, los siguientes:

- a) la insuficiencia del tiempo y/o de la información necesarios para cumplir la petición;
- b) la imposibilidad, pese a los medios desplegados, de adoptar medidas adecuadas de seguridad para el transporte de las personas;
- c) la existencia de una amenaza al orden público y a la seguridad en el Estado anfitrión.

6. Toda persona detenida será transportada directamente y sin impedimento alguno al destino especificado en los párrafos 1 y 2 del presente artículo o a cualquier otro destino que determine la Corte de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo.

7. La Corte y el Estado anfitrión adoptarán las disposiciones prácticas que consideren oportunas para el transporte de las personas detenidas de conformidad con el presente artículo.

Artículo 45

Transporte de las personas que comparecen ante la Corte voluntariamente o en respuesta a un requerimiento

Las disposiciones del artículo 44 del presente Acuerdo se aplicarán, *mutatis mutandis*, al transporte de las personas que comparezcan ante la Corte voluntariamente o en respuesta a un requerimiento.

Artículo 46
Cooperación en cuestiones de detención

1. El Estado anfitrión cooperará con la Corte para facilitar la detención de personas y permitir a la Corte el desempeño de sus funciones en su centro de detención.
2. Cuando la presencia de una persona detenida sea necesaria a los efectos de prestar testimonio o cualquier otro tipo de asistencia a la Corte y cuando, por razones de seguridad, esa persona no pueda ser custodiada en el Centro de detención de la Corte, la Corte y el Estado anfitrión se consultarán y, en caso necesario, tomarán las disposiciones oportunas para el transporte de la persona a un centro penitenciario o a cualquier otro lugar facilitado por el Estado anfitrión.

Artículo 47
Libertad provisional

1. El Estado anfitrión facilitará el traslado de las personas en libertad provisional a otro Estado.
2. El Estado anfitrión facilitará la reentrada y la estancia en su territorio de las personas en libertad provisional por un período de corta duración para toda finalidad relacionada con las actuaciones ante la Corte.
3. La Corte y el Estado anfitrión adoptarán disposiciones prácticas para la aplicación del presente artículo.

Artículo 48
Puesta en libertad sin fallo condenatorio

1. Sin perjuicio del párrafo 2 del presente artículo, cuando una persona entregada a la Corte sea puesta en libertad porque la Corte carece de jurisdicción, el caso es inadmisibles según los apartados b), c) o d) del párrafo 1 del artículo 17 del Estatuto, los cargos no han sido confirmados en los términos del artículo 61 del Estatuto, la persona ha sido absuelta en juicio o en apelación o por cualquier otra causa, la Corte tomará lo antes posible las disposiciones que considere oportunas para el traslado de esa persona, teniendo en cuenta sus opiniones, al Estado que esté obligado a recibirla, a otro Estado que se avenga a recibirla o al Estado que haya solicitado su extradición con el consentimiento del Estado que inicialmente haya entregado a esa persona.
2. Cuando la Corte haya determinado que el caso es inadmisibles según el apartado a) del párrafo 1 del artículo 17 del Estatuto, la Corte tomará las disposiciones oportunas para el traslado de la persona al Estado cuya investigación o acusación haya formado la base de la impugnación de la admisibilidad, a menos que el Estado que inicialmente entregó a la persona solicite su devolución.
3. Las disposiciones del artículo 44 del presente Acuerdo se aplicarán, *mutatis mutandis*, al transporte de las personas a las que se hace referencia en el presente artículo dentro del Estado anfitrión.

Artículo 49
Ejecución de las penas en el Estado anfitrión

1. La Corte procurará designar el Estado de ejecución de la pena de conformidad con el párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto.
2. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto, la Corte informará al Estado anfitrión de la necesidad de que la pena se cumpla en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión de conformidad con el párrafo 4 del artículo 103 del Estatuto.

3. Una vez comenzado el cumplimiento de la pena de conformidad con el párrafo 4 del artículo 103 del Estatuto, la Corte seguirá tratando de designar un Estado de ejecución de conformidad con el párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto. La Corte comunicará al Estado anfitrión las circunstancias que considere pertinentes en relación con la lista a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto. La Corte informará al Estado anfitrión tan pronto como un Estado haya aceptado la designación prevista en el párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto.

4. El cumplimiento de la pena se regirá por el Estatuto, en particular las disposiciones de la Parte X, y las Reglas de Procedimiento y Prueba, en particular las disposiciones pertinentes del capítulo 12. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado de ejecución, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 106 del Estatuto.

5. El Estado anfitrión podrá transmitir a la Corte, para su consideración, las preocupaciones humanitarias y de otro tipo relacionadas con las condiciones o modalidades de ejecución a los efectos de la supervisión de la ejecución de penas y de las condiciones de reclusión.

6. En un acuerdo separado entre la Corte y el Estado anfitrión se establecerán otras condiciones de ejecución de la pena y otras disposiciones. La Corte y el Estado anfitrión tomarán disposiciones prácticas para la ejecución de la pena en cada caso a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 50

Las detenciones de corta duración

1. Si tras el fallo condenatorio y la sentencia firme o tras la reducción de una pena de conformidad con el artículo 110 del Estatuto, el período pendiente de cumplimiento de la pena impuesta por la Corte es inferior a seis meses, la Corte considerará si la pena se puede cumplir en el centro de detención de la Corte.

2. Cuando sea necesario cambiar el Estado designado para la ejecución de la pena y cuando el período pendiente de cumplimiento antes del traslado a otro Estado no exceda de seis meses, la Corte y el Estado anfitrión se consultarán en cuanto a si el condenado puede ser trasladado a un establecimiento penitenciario designado por el Estado anfitrión de conformidad con el párrafo 4 del artículo 103 del Estatuto. Si el período pendiente de cumplimiento es superior a seis meses, el condenado será trasladado desde el centro de detención de la Corte al establecimiento que designe el Estado anfitrión de conformidad con el párrafo 4 del artículo 103 del Estatuto, previa petición de la Corte a tal efecto.

Artículo 51

Limitación del ejercicio de la jurisdicción del Estado anfitrión

1. El Estado anfitrión no ejercerá su jurisdicción ni tramitará ninguna petición de asistencia o de extradición que reciba de otro Estado en relación con las personas entregadas a la Corte de conformidad con la Parte IX del Estatuto, las personas en libertad provisional o las personas que comparezcan ante la Corte voluntariamente o en respuesta a un requerimiento por acciones, omisiones o condenas anteriores a la entrega, el traslado o la comparecencia ante la Corte, excepto en los casos previstos por el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. Cuando la persona a la que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo sea puesta en libertad por cualquier razón sin que se haya dictado un fallo condenatorio, dicho párrafo seguirá en aplicación durante un período de 15 días consecutivos a partir de la fecha de la puesta en libertad.

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52

Arreglos y acuerdos complementarios

1. Las disposiciones del presente Acuerdo se complementarán en el momento de la firma por un intercambio de cartas que confirmen la interpretación común del Acuerdo por las partes.
2. A los efectos de la aplicación del presente Acuerdo o del examen de cuestiones no previstas por el mismo, la Corte y el Estado anfitrión podrán concertar los acuerdos y arreglos complementarios que consideren oportunos.

Artículo 53

Trato no menos favorable

Si el Estado anfitrión concede en el futuro a una organización o a un tribunal internacional privilegios, inmunidades o trato más favorable que los privilegios, inmunidades o trato comparables del presente Acuerdo, la Corte o toda persona con derecho a beneficiarse de los privilegios, inmunidades y trato reconocidos en el presente Acuerdo disfrutarán de los privilegios, inmunidades y trato más favorables.

Artículo 54

Solución de controversias con terceros

La Corte, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la Asamblea reconocidas por el Estatuto, adoptará disposiciones sobre los modos apropiados de solución de las controversias:

- a) que dimanen de contratos o de otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte;
- b) que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiera renunciado a ella.

Artículo 55

Solución de controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo o de los arreglos o acuerdos complementarios

1. Las controversias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo o de los arreglos o acuerdos complementarios entre la Corte y el Estado anfitrión se resolverán mediante consultas, negociaciones o cualquier otro modo convenido de arreglo.
2. Si la controversia no se resuelve de conformidad con párrafo 1 del presente artículo dentro de los tres meses siguientes a la presentación de una solicitud por escrito de una de las partes, será sometida, a petición de cualquiera de las partes, a un tribunal arbitral que actuará de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 3 a 5 *infra*.
3. El tribunal arbitral estará compuesto de tres árbitros: uno será elegido por cada parte en la controversia y el tercero, que actuará como Presidente del tribunal, será elegido por los otros dos. Si una de las partes no hubiera nombrado un árbitro del tribunal dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de un árbitro por la otra parte, ésta podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe dicho nombramiento. En caso de que los dos primeros árbitros no lleguen a un acuerdo sobre el nombramiento del Presidente del tribunal en los dos meses siguientes a su nombramiento, cualquiera de las partes podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que elija al Presidente.

4. A menos que las partes acuerden otra cosa, el tribunal arbitral decidirá su propio procedimiento y los gastos serán sufragados por las partes en la proporción que el tribunal determine.

5. El tribunal arbitral, que decidirá por mayoría de votos, resolverá la controversia de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y los arreglos o acuerdos ulteriores y con las normas aplicables de derecho internacional. El laudo del tribunal arbitral será firme y obligatorio para las partes en la diferencia.

Artículo 56
Aplicación

Con respecto al Reino de los Países Bajos, el presente Acuerdo se aplicará solamente a la parte europea del mismo.

Artículo 57
Enmiendas y terminación

1. El presente Acuerdo podrá ser enmendado o terminado por consentimiento mutuo de las partes.

2. El presente Acuerdo dejará de estar en vigor por consentimiento mutuo de las partes.

Artículo 58
Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que ambas partes se hayan notificado por escrito que se han cumplido los requisitos legales para la entrada en vigor.

HECHO en La Haya el [...] por duplicado, en idioma inglés.

Por el Reino de los Países Bajos

(firmado) Ministerio de Relaciones Exteriores

Por la Corte Penal Internacional

(firmado) Presidente

Anexo III

Recomendaciones sobre los atrasos de los Estados Partes

Recomendación 1

Pide al Secretario de la Corte (“el Secretario”) que facilite a los Estados Partes, con carácter trimestral, una nota de información actualizada sobre las contribuciones recibidas de los Estados Partes desde que entró en vigor para cada Estado Parte el Estatuto de Roma, a fin de dar mayor transparencia a la administración de la Corte y proporcionar a los Estados Partes información actualizada sobre la situación financiera de la Corte. Esa nota de información se debería dirigir a las capitales y a las embajadas y misiones permanentes en La Haya y Nueva York. A fin de asegurar que las personas adecuadas reciben la información necesaria, en consecuencia podría ser necesario ponerse en contacto con varios representantes de un mismo Estado Parte.

Recomendación 2

Pide a la Mesa y a los distintos Estados Partes que continúen abordando el tema de la situación financiera de la Corte en sus contactos bilaterales con otros Estados Partes, según proceda, y subraye la importancia del pago puntual de las contribuciones para el funcionamiento eficaz de la Corte. En particular, los representantes de los Estados Partes en mora deberían ser informados de los hechos y de las posibles consecuencias para la Corte del impago o del pago atrasado de las contribuciones, y estimulados a intervenir ante las autoridades competentes de sus gobiernos.

Recomendación 3

Pide que, para facilitar una mejor comunicación entre la Corte y los Estados Partes sobre el tema de las contribuciones, los Estados Partes proporcionen al Secretario, con carácter anual y previa petición de la Corte, información (nombres y detalles del contacto) de la persona responsable de los pagos a la Corte. Esta información podría venir acompañada, con carácter voluntario, de información sobre el momento en que el Estado Parte espera remitir su contribución financiera a la Corte.

Recomendación 4

Pide a la Corte que continúe facilitando a los Estados Partes, en una etapa inicial, información sobre su viabilidad financiera y sobre la planificación en curso respecto del presupuesto del ejercicio económico siguiente. Sin perjuicio de las recomendaciones pertinentes del Comité de Presupuesto y Finanzas ni de las decisiones de la Asamblea de los Estados Partes, esa información puntual debería permitir a los Estados Partes adoptar las precauciones necesarias para pagar sus contribuciones sin demora.

Recomendación 5

Decide que el Estado Parte que solicite la concesión de una excepción respecto de la pérdida del derecho de voto en virtud del párrafo 8 del artículo 112 del Estatuto de Roma presentará información, documentación o ambas cosas (con arreglo al párrafo 42 de la parte dispositiva de la resolución ICC/4/Res.4) que justifique y apoye ampliamente la pretensión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte de que se trata.

Recomendación 6

Decide que ese Estado Parte podrá presentar documentación que ya haya presentado anteriormente en otra parte con fines comparables. La Asamblea tomará debidamente en cuenta la decisión de otra organización en relación con la pérdida del derecho de voto por impago de contribuciones, pero ello no prejuzgará su propia decisión.

Recomendación 7

Decide también que, de ser posible, las solicitudes deberán ir acompañadas de un plan de pagos u otra forma de compromiso político del Estado solicitante para resolver urgentemente la cuestión y adoptar medidas concretas para el pago tan pronto como sea posible. Aunque corresponde a cada país decidir si adopta un plan de pagos concretos, la opción de un plan de pagos para reducir los atrasos aumentaría sustancialmente la posibilidad de que se concediera permiso para votar.

Recomendación 8

Pide que la Secretaría avise dos veces al año (a mediados de enero y a mediados de junio) a los Estados Partes que podrían enfrentarse con la pérdida de su derecho de voto, de manera que esos Estados Partes puedan tomar medidas oportunas para el pago de sus atrasos.

Recomendación 9

Decide que la Asamblea de los Estados Partes podría examinar las solicitudes de excepción de la pérdida del derecho de voto con relación a cualquier continuación de períodos de sesiones de la Asamblea o reuniones de la Mesa que se celebren entre el 1º de enero y el primer período de sesiones del Comité de Presupuesto y Finanzas de cada año, sin una previa recomendación del Comité.

Resolución ICC-ASP/5 Res.4

Aprobada por consenso en la séptima sesión plenaria el 1º de diciembre de 2006

ICC-ASP/5 Res.4

Presupuesto por programas para 2007, Fondo de Operaciones para 2007, escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de la Corte Penal Internacional y financiación de las consignaciones para el año 2007

La Asamblea de los Estados Partes,

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas de la Corte Penal Internacional para 2007 y las conclusiones y recomendaciones conexas del Comité de Presupuesto y Finanzas que figuran en el informe sobre los trabajos de su séptimo período de sesiones¹

A. Presupuesto por programas para 2007

1. Aprueba consignaciones por un total de 88.871.800 euros para las siguientes secciones:

Sección	Euros
Programa principal I - Judicatura	9.999.200
Programa principal II - Fiscalía	23.370.900
Programa principal III - Secretaría	48.840.900
Programa principal IV – Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	4.377.800
Programa principal V – Inversiones en los locales de la Corte	2.283.000
Total	88.871.800

2. Aprueba asimismo las siguientes plantillas para cada una de las secciones mencionadas anteriormente:

	Judicatura	Fiscalía	Secretaría	Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Inversiones en los locales de la Corte	Total
SGA		1				1
SsG		2	1			3
D-2						
D-1		2	5	1		8
P-5	3	10	14		1	28
P-4	2	25	28	2		57
P-3	4	41	61	1		107
P-2	17	41	45		1	104
P-1	1	13	5			19
<i>Subtotal</i>	<i>27</i>	<i>135</i>	<i>159</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>327</i>
SG-CP	1	1	18	3		23
SG-OC	15	64	215	2	1	297
<i>Subtotal</i>	<i>16</i>	<i>65</i>	<i>233</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>320</i>
Total	43	200	392	9	3	647

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, quinto período de sesiones, La Haya, 23 de noviembre a 1º de diciembre de 2006 (publicación de la Corte Penal Internacional, ICC-ASP/5/32) parte II, D.6 b).

B. Fondo de Operaciones para 2007

La Asamblea de los Estados Partes,

Resuelve que el capital del Fondo de Operaciones para 2007 se establezca sea de 7.405.183 euros y autoriza al Secretario a hacer adelantos con cargo al Fondo de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la Corte.

C. Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de la Corte Penal Internacional

La Asamblea de los Estados Partes,

Decide que, para el año 2007, la Corte Penal Internacional adopte la escala de cuotas de las Naciones Unidas aplicable para el año 2007, con ajustes que tengan en cuenta la diferencia en el número de miembros entre las Naciones Unidas y la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, de conformidad con los principios en los que se basa la escala de cuotas de las Naciones Unidas.

Señala además que toda cuota máxima que se aplique a los contribuyentes más importantes al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas se aplicará también a la escala de cuotas de la Corte Penal Internacional.

D. Financiación de las consignaciones para 2007

La Asamblea de los Estados Partes,

Resuelve que, para el año 2007, las consignaciones presupuestarias por un valor de 88.871.800 euros y el capital del Fondo de Operaciones de 7.405.983 euros aprobadas por la Asamblea en virtud del párrafo 1 de la parte A y la parte B respectivamente de la presente resolución, se financien con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 5 y el párrafo 6 del artículo 6 del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la Corte.